



Más de 100 000 personas marcharon en la ciudad de La Paz en octubre de 2003 protestando contra un plan gubernamental de exportar gas a EE.UU. y México a precios bajos. Foto: Noah Friedman-Rudovsky (2003).

## CAPÍTULO 3

# Petróleo y gas: la riqueza ilusoria debajo de sus pies

*Gretchen Gordon y Aaron Luoma*



*El tema del gas y del petróleo y quién controla estos recursos ha estado en el centro de las recientes conmociones políticas de Bolivia. Protestas masivas que demandaban al gobierno volver a tomar control de la industria de los hidrocarburos, privatizada en la década de los 90, han derrocado dos gobiernos desde el año 2003. Por más de 70 años la historia de Bolivia ha presenciado una constante lucha para decidir si esta riqueza natural debería ser desarrollada por corporaciones extranjeras o por Bolivia misma. En este capítulo, Gretchen Gordon y Aaron Luoma se sumergen en la historia de las batallas del gas y el petróleo de Bolivia y en las preguntas complejas que impulsan este debate en estos días.*

## I. Introducción

El primero de mayo de 2006, se colgaron carteles que decían “Nacionalizado: propiedad del pueblo boliviano” cubriendo los ingresos de las refinerías en todas partes del país. Desde el campo gasífero de San Alberto en la región de Tarija, al sur de Bolivia, el presidente Evo Morales se presentó frente a una multitud de cámaras de televisión, flanqueado por sus ministros y las fuerzas militares. En un evento cuidadosamente orquestado por relaciones públicas, Morales anunció sorprendentemente que en ese momento el Ejército estaba resguardando los campos de petróleo y gas en todo el país. “...es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales de nuestro país.” proclamó Morales. “Una vez recuperado este recurso natural, generará fuentes de trabajo. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales, de las trasnacionales.”<sup>1</sup>

En diciembre de 2005, cuando Evo Morales consiguió una arrolladora victoria electoral sin precedentes, la nacionalización de las reservas de hidrocarburos se había convertido en una extendida demanda popular. En 2003, el resentimiento por las promesas no cumplidas producto de la radical privatización de los recursos hidrocarburíferos a mediados de los años 90 en Bolivia, estalló en protestas masivas contra la propuesta de venta de gas barato a Estados Unidos a través de Chile, con un resultado de más de 60 muertes y la expulsión del presidente de Bolivia.

Desde una perspectiva histórica, el decreto de ‘nacionalización’ de Morales, de mayo de 2006, fue sólo la más reciente salva boliviana en su larga batalla contra las compañías extranjeras sobre el control de sus recursos petroleros y gasíferos. El llamado para el cambio proviene de la memoria colectiva de la gente que cree que su país nunca ha sido beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. Aunque las reformas de Morales son más conservadoras que una nacionalización tradicional, reflejan un esfuerzo para recuperar de alguna manera el control sobre la industria que después de su privatización generó excelentes beneficios para las compañías petroleras extranjeras, pero han mantenido a Bolivia como el país más pobre de Sud América.

Con la segunda reserva de gas más grande de Sud América –avaluada en más de 200 000 millones de dólares<sup>2</sup>- Bolivia mira esperanzada a este recurso como un camino para salir de la pobreza y como base de un desarrollo económico más amplio. Sin embargo, convertir el recurso natural en riqueza que mejore la vida diaria de la gente ha sido una meta no realizada para la mayoría de los países con grandes recursos naturales en todo el mundo. Las posibilidades de que Bolivia supere esta tendencia requerirá no sólo resistir a las presiones de poderosos intereses económicos y políticos, sino también romper un modelo que data de la época de la Colonia.

## **II. De la plata al gas: la riqueza ilusoria**

Durante casi cinco siglos, los valiosos y percederos recursos naturales de Bolivia han sido extraídos uno a uno para crear riqueza en el exterior mientras que la mayoría de sus ciudadanos vive en la pobreza. Bolivia es emblemática entre los países que se vuelven dependientes por la exportación de un sólo producto, dejando a su economía vulnerable a la volatilidad del mercado internacional. En los siglos XVI y XVII, el destino económico del país estuvo simbolizado por el Cerro Rico, la montaña llena de plata ubicada en las afueras de la ciudad de Potosí, y que fue vaciada por los españoles para financiar prácticamente al imperio español por dos siglos. A fines del siglo XIX, la goma y el guano –excrementos secos de ave codiciado por los ingleses como explosivo y fertilizante- junto con la plata fueron explotados por intereses extranjeros en confabulación con las ricas elites bolivianas.

A inicios del siglo XX, la invención de latas de estaño para preservar la comida junto a la construcción de armamento de preguerra en Europa y Estados Unidos causó que el mineral entrara en auge, al tiempo que fueron descubiertos grandes depósitos de este mineral en las tierras altas de Bolivia. Apoyada inicialmente por inversores extranjeros, tres familias bolivianas llegaron a controlar 80% de la industria del estaño.<sup>3</sup> En una economía dominada por la exportación de dicho mineral, los ‘barones del estaño’ consolidaron su poder político y económico. Simón Patiño, conocido como el “Rockefeller boliviano,” se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, controlando la mitad de la producción de estaño en el país. En una destacable hazaña para un país sin costas marítimas, rodeado de montañas, Bolivia suministró cerca de la mitad del estaño necesario para sostener los esfuerzos bélicos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.<sup>4</sup>

No es una sorpresa que, como la plata, esta indecible riqueza estañífera fuera acumulada a expensas de los mal pagados mineros que trabajaban en condiciones miserables. En 1945, un informe determinó que la edad promedio de los mineros que sufrían una severa enfermedad de pulmones era de 32 años.<sup>5</sup> Muchas de las protestas que realizaron los mineros para mejorar sus condiciones de trabajo fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad privada y las tropas militares del gobierno. Esas protestas sentaron las bases de la posterior resistencia social.

Durante la mayor parte del siglo XX –hasta que el mercado del estaño colapsó en 1985– el estaño proveía los principales ingresos de las exportaciones de Bolivia; las oscilaciones de su volátil precio crearon repetidos auges y recesiones en la economía boliviana.<sup>6</sup> Sergio Almaraz Paz, ensayista y político boliviano, reflexiona sobre el legado del estaño:

Bolivia se encuentra al término de un camino recorrido: medio siglo de explotación estañífera han dejado a su paso un país atrasado y empobrecido, una economía que es esencialmente la misma de hace cincuenta años. ¿Qué nos dice la experiencia del estaño? Bolivia fue el estaño. Los bolivianos vivieron con las migajas que dejó el estaño. En esta inexorable realidad, economía, política y cultura, se desarrollaron –se deformaron– a golpes de estaño.<sup>7</sup>

## La esperanza por el gas

Después de la caída de la industria estañífera, el gas se convirtió en el recurso natural más importante del país. Los gigantescos campos gasíferos en las tierras templadas de la región del Chaco, al Este de Bolivia, de pronto emergieron como el moderno Cerro Rico de nuestros días.

Hasta fines del siglo XX, el gas natural era considerado por muchas de las compañías petroleras, como un producto de desecho en el proceso de extracción del oro negro de la economía global. “La idea de que el gas pudiera ser una

fuente de dinero le habría parecido a la mayoría de los ejecutivos petroleros un absurdo,” escribe Paul Roberts en *The End of Oil*.<sup>8</sup> Sin embargo, en los últimos seis años, con el aumento de la escasez de petróleo, los precios del gas natural se han duplicado, colocando a las compañías petroleras “en una carrera para conseguir una mejor posición [en el negocio] del gas,” según escribió Roberts.<sup>9</sup> El consumo global de gas natural en este momento se iguala al carbón, y tan pronto como para el año 2025 el gas podría rebasar al petróleo como el recurso energético dominante en el mundo.<sup>10</sup>

Para los países cuyo objetivo es lograr contar con un recurso energético más amigable al medioambiente, el gas es una alternativa a sus primos más contaminantes, el petróleo y el carbón. El gas es considerado como un “carburante puente” que ayudará a disminuir la demanda global por petróleo y dirigirá a la industria hacia una utilización de recursos energéticos limpios que no sean hidrocarburos. Mientras los analistas continúan debatiendo cuándo se llegará al límite de la oferta de petróleo, la carrera por el gas ya está en pleno vuelo.

El gas es valorado por su versatilidad. En los países más industrializados de Brasil, Argentina y Chile, la necesidad de energía para la industria está aumentando la demanda de gas natural. Además, es un carburante barato para la industria de alimentos, el transporte y la calefacción. Solamente en Bolivia, en menos de tres años, el número de automóviles que usan este carburante se ha triplicado, aproximándose a 60 000.<sup>11</sup> El precio del gas en Bolivia para automotores es un tercio del de la gasolina, una bendición para los taxistas que se esfuerzan para poder pagar sus necesidades básicas. Según las expectativas de la industria en 2006, Bolivia iba a tener aproximadamente 20% de sus automóviles –100 000 en total– funcionando con gas natural para el año 2008, lo cual sería el mayor porcentaje de Sud América.<sup>12</sup>

### El ABC del gas

El gas natural, el petróleo y otros hidrocarburos provienen de los mismos procesos geológicos: descomposición orgánica de materia ubicada en las profundidades de la superficie terrestre. Las reservas de este combustible basados en fósiles de carbono normalmente contienen agua que se queda abajo porque es más pesada que el gas o el petróleo. El petróleo se encuentra sobre el agua mientras que el gas natural se encuentra más cerca de la superficie, presionado contra la tierra y presurizando la reserva como si fuera una botella de champán agitada.

Los depósitos que principalmente tienen petróleo son llamados “campos petroleros”, y los ricos en gas “campos gasíferos.” El gas que se encuentra en los campos petrolíferos es llamado gas asociado. Debido a que es caro separarlo y procesarlo, muchos productores de petróleo desperdician o queman el gas natural. Esta práctica libera una fuerte y dañina contaminación, que es ilegal en la mayor parte del mundo industrializado, pero todavía se utiliza en muchos países. La mayoría del gas boliviano es gas ‘no asociado’ –que significa que es encontrado

con un poco o nada de petróleo— y por ello es menos caro extraerlo y procesarlo. Las reservas de gas de Venezuela, en cambio, aunque son más numerosas que las de Bolivia por más de tres a uno, son predominantemente de gas asociado, lo cual complica la capacidad de explotarlo lucrativamente.

En su forma pura, el gas natural es incoloro e inodoro. En realidad es una mezcla de una variedad de gases que incluyen etano, butano, propano y el mayor componente de gas natural, metano. Bolivia es afortunada porque su gas contiene más de 90% de metano, un gas valioso que puede ser convertido en electricidad o procesado para elaborar productos derivados tales como plástico, fertilizantes, diesel y gasolina sintética.<sup>13</sup>

Aunque el gas natural tiene muchos usos, por su estado gaseoso, su transportación es complicada y toma mucho tiempo. Para exportar el gas natural por mar, debe ser licuado en plantas procesadoras caras y después embarcado en grandes tanques que son más costosos de construir que los tradicionales petroleros. Sólo recientemente —junto con el alza de precios del gas natural— ha llegado a ser económicamente viable exportarlo a distancias más largas.

Por la dificultad de comercializarlo globalmente, el gas natural, a diferencia del petróleo, no tiene un precio de referencia establecido internacionalmente. Por lo tanto, los precios son determinados en base a la demanda regional y a negociaciones entre los países productores y las compañías que lo compran.

Los bolivianos están muy conscientes de que su vasta riqueza mineral va desapareciendo debajo de sus pies, y están determinados a asegurar que el gas no siga el mismo destino que la plata y el estaño. Carlos Rojas, un representante de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) en la ciudad de El Alto, lamenta que:

Después del saqueo de nuestro oro, plata, estaño, y de todos los minerales que hemos tenido... ahora solamente nos queda el gas... ¿Qué futuro nos espera a nosotros, a nuestros hijos? ... No hay otro recurso en Bolivia que pueda ser nuestro futuro sostén económico.<sup>14</sup>

### **La lucha por el control**

Desde la década de los años 30, los recursos hidrocarburíferos de Bolivia han estado sometidos a constantes tirones y aflojes entre el Estado boliviano y las compañías internacionales petroleras y gasíferas. Algunos gobiernos bolivianos han otorgado generosos derechos de exploración y producción y una vasta influencia en las decisiones políticas a compañías privadas. Como en otros tiempos, el péndulo ha regresado hacia un mayor control gubernamental de estos recursos, tal como sucedió durante las nacionalizaciones de la industria hidrocarburífera en 1937 y 1969.

Este tire y afloje por el control de las reservas de hidrocarburos en Bolivia empezó en 1896, cuando el Dr. Manuel Cuéllar, en una expedición por la remota

región del Chaco, al Este de Bolivia, notó que la gente guaraní usaba un líquido negro grasoso para curar las heridas de sus animales. Posteriormente confirmó que esa sustancia era petróleo de alta calidad, y después de asegurarse la inversión, formó la primera empresa petrolera boliviana que fue más tarde vendida en 1921 a la gigante corporación estadounidense *Standard Oil*.<sup>15</sup>

La Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller, era la compañía más grande del mundo y durante 15 años pudo explotar el petróleo sin fiscalización gubernamental y sin competencia en la escasamente poblada región Este de Bolivia, cercana a la frontera con Paraguay y Argentina. Por muchos años la Standard Oil exportó ilegalmente petróleo a la Argentina por un oleoducto clandestino, evadió impuestos y no abasteció adecuadamente el mercado de combustibles boliviano. También fue acusada de sabotear el abastecimiento de carburantes a las Fuerzas Armadas bolivianas durante la infructuosa Guerra del Chaco con Paraguay entre 1932 y 1935, en la cual más de 50 000 bolivianos murieron en un país de sólo dos millones de habitantes.<sup>16</sup>

El trauma de la Guerra del Chaco unió a la nación por primera vez y creó una ola de sentimientos nacionalistas y nuevas ideas políticas. Entre éstas, se encontraba la comprensión de la importancia del rol del Estado en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos del país, de los cuales 85% se encuentra ahora en la región del Chaco. El pueblo boliviano cada vez más indignado con las acciones de la Standard Oil durante la Guerra del Chaco, tomó las calles en protesta.<sup>17</sup> En respuesta a la demanda popular, el gobierno fundó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La ley de 1936, que creó YPFB, establecía que “la importancia del petróleo en el mundo, su significación económica y su valor para el Estado, demandan cada día más que estos recursos sean puestos bajo el control directo de la Nación”<sup>18</sup>

### **Nacionalización, privatización y nacionalización otra vez**

Un año después, en 1937, Bolivia se convirtió en el primer país latinoamericano que nacionalizó su industria petrolera, un evento histórico que pavimentó el camino para que México hiciera lo mismo el siguiente año. Con la nacionalización, el Estado boliviano se incautó de todos los bienes y operaciones de la Standard Oil, a quien pagó una compensación de 1,7 millones de dólares, y entregó dichos bienes a la empresa petrolera boliviana. El escritor boliviano Carlos Montenegro escribió que “por primera vez en la historia universal, la más poderosa empresa del planeta [la Standard Oil] ha sido moralmente castigada por un Estado.”<sup>19</sup> La nacionalización de la transnacional sería el inicio de una lucha que duró décadas entre el Estado y las compañías extranjeras por el control de los hidrocarburos bolivianos.

En el lapso de cinco años, la empresa estatal boliviana produjo más barriles de crudo que la Standard Oil en sus 15 años de explotación en Bolivia, y en 1954,

YPFB alcanzó su principal objetivo de producir suficiente combustible como para abastecer la demanda doméstica.<sup>20</sup>

A sólo tres años después de la revolución de 1952, que trajo profundos cambios para el pueblo boliviano, incluyendo la nacionalización de la industria minera, el monopolio de YPFB sobre la industria petrolera de Bolivia irónicamente llegó a su fin. El péndulo volvió hacia el control extranjero privado de los hidrocarburos bolivianos, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro abrió las puertas a las inversiones extranjeras, citando un déficit fiscal y un crecimiento económico lento.<sup>21</sup>

El gobierno de Estados Unidos dejó en claro que cualquier nueva inversión de las compañías estadounidenses estaba sujeta a que Bolivia reformase su sector petrolero. El resultado de ello fue el Código Davenport de Paz Estenssoro, en 1955, que permitía a las compañías petroleras estadounidenses explotar el petróleo boliviano bajo términos extremadamente generosos, pagando al Estado sólo 20% de las ganancias.<sup>22</sup> Por los años 60, diez compañías petroleras estadounidenses habían empezado a operar en Bolivia, siendo la *Gulf Oil Company* la principal protagonista en la industria del petróleo en Bolivia.<sup>23</sup> Las modificaciones de las políticas bolivianas fueron recompensadas con un incremento de 500% en la ayuda estadounidense.<sup>24</sup>

### Nacionalización en pocas palabras

El término *nacionalización* puede tener varias acepciones diferentes. Técnicamente, nacionalización significa expropiación o la incautación gubernamental de los activos en manos privadas. Esto puede ser realizado con o sin algún tipo de pago como compensación por parte del gobierno al propietario de dichos activos. La decisión gubernamental de expropiar bienes o propiedad privada para que sirvan mejor al interés público, mientras haya compensación, es un derecho de las naciones soberanas reconocido por las Naciones Unidas. La nacionalización puede incluir bienes y/o servicios, como ocurrió con la nacionalización de los servicios de seguridad aeroportuaria por el gobierno estadounidense en 2001, pero las nacionalizaciones más conocidas han significado la recuperación de los recursos naturales que previamente habían sido privatizados. Aunque recientemente el término nacionalización ha llegado a ser políticamente popular en Bolivia, las reformas del gobierno de Morales sobre el sector de hidrocarburos del país no son una nacionalización en el sentido estricto, porque no han involucrado la incautación de los activos en propiedad privada.

Durante las décadas de los años 50 y 60, YPFB continuó sus actividades de exploración y producción de petróleo. El bajo porcentaje que recibía el gobierno por los ingresos petroleros limitó severamente la reinversión en nuevos desarrollos y tecnología, como lo hizo también el desvío de ingresos por los sucesivos gobiernos bolivianos.<sup>25</sup> La influencia e importancia de YPFB se vio continuamente disminuida a la sombra de la Gulf Oil.



A principios de los años 60, la Gulf descubrió las primeras reservas importantes de gas natural en Bolivia.<sup>26</sup> En 1964, el entonces dictador boliviano, General René Barrientos, incondicional aliado de Estados Unidos, otorgó a la Gulf Oil el derecho de explotar esas reservas, tomando ventaja del impreciso lenguaje del Código Davenport, sobre si el gas descubierto por compañías extranjeras pertenecía al Estado o a las compañías.<sup>27</sup> El primer contrato de exportación de gas fue firmado con Argentina en 1968, con la Gulf como primera beneficiaria.<sup>28</sup>

Para 1968, la Gulf fue capaz de reinvertir sus lucrativas ganancias y aumentar sus reservas de petróleo cinco veces más que las de la empobrecida YPFB, extendiendo su control a 80% del petróleo boliviano y a 90% de su gas.<sup>29</sup> Augusto Céspedes, un escritor boliviano y ex diplomático, instó a la resistencia contra la poderosa presencia de la Gulf en Bolivia, argumentando que la “soberanía es meramente teórica” cuando un Estado débil confronta a una compañía respaldada por poderosas fuerzas políticas y económicas internacionales.<sup>30</sup>

En septiembre de 1969, después de la muerte del General Barrientos, una junta militar de gobierno de izquierdas, presidida por el General Alfredo Ovando Candia, anuló el Código Davenport. La administración de Ovando arguyó que el Código “no fue redactado por bolivianos, contenía disposiciones violatorias de la independencia del Estado y que el pueblo boliviano lo había repudiado, reiterada y categóricamente.”<sup>31</sup> La Gulf respondió con una oferta de dividir los ingresos de los hidrocarburos 50-50, pero el gobierno no quería negociar.

El 17 de octubre de 1969, bajo la declaración gubernamental del “Día de la dignidad nacional,” el ministro de Hidrocarburos y Minas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, firmó el decreto que nacionalizaba los activos de la Gulf Oil Company. Quiroga escribió poco después que las anteriores administraciones le había dado a la Gulf el control de la política nacional del petróleo y que los más altos funcionarios públicos estaban “al servicio de los intereses de esa compañía.”<sup>32</sup> El General Ovando se refirió a la Gulf como “una empresa que había adquirido dominio económico y político similar al de los ‘barones del estaño’.”<sup>33</sup>

Ante estos hechos, las compañías petroleras respondieron estableciendo un boicot al petróleo de Bolivia, que le costó al gobierno 14,4 millones de dólares en ganancias por exportaciones. Entre tanto, el gobierno estadounidense presionó con éxito al gobierno de Ovando a que pagara una compensación de 78 millones de dólares por las propiedades, maquinaria y vehículos que la Gulf había dejado atrás.<sup>34</sup>

### **YPFB: el sostén de la familia boliviana**

En 1970, bajo la dictadura del General Hugo Banzer Suárez, YPFB expandió sus operaciones gracias al aumento de las ganancias debidas a la triplicación de los precios internacionales del petróleo. En 1972 se aprobó una nueva ley sobre hidrocarburos que ofrecía generosas oportunidades de inversión a las compañías

extranjeras, pero que brindaba al gobierno 50% de las ganancias. Acuerdos con dos compañías petroleras estadounidenses en 1972 posibilitaron la inversión necesaria para empezar la exportación de gas a Argentina, cumpliendo así con el contrato originalmente suscrito en 1968.<sup>35</sup>

En 1985, con el colapso de la industria del estaño boliviano, YPF se convirtió en la principal fuente de ingresos gubernamentales, ocupando un lugar entre las compañías más grandes de Latinoamérica, dando empleo a 9 150 personas.<sup>36</sup> En la década de los 80 y a principios de la de 1990, YPF participó directamente –así también por medio de contratos con compañías privadas– en la exploración y producción y mantuvo el monopolio en la transportación y comercialización del petróleo, gas y sus derivados.

Además del acuerdo de exportación a Argentina, YPF empezó a exportar petróleo a Chile y Argentina, y petróleo y gas a Brasil.<sup>37</sup> Aunque YPF fue criticada por ineficiente y corrupta, fue una compañía altamente lucrativa, generando 3 570 millones de dólares entre 1985 y 1995, aproximadamente la mitad del total de los ingresos del gobierno en ese periodo.<sup>38</sup>

Sin embargo, a mediados de los años 80, los políticos conservadores y los intereses empresariales iniciaron una campaña para desacreditar la imagen de YPF y aplicaron medidas políticas que detuvieron su crecimiento.<sup>39</sup> Parte de estos esfuerzos fue una ley emitida en 1985 que estipulaba que 65% de las ganancias de YPF se destinara al tesoro nacional anualmente, dejando muy poco para ser invertido en exploraciones y en el desarrollo de nuevos campos.<sup>40</sup> Un precio de exportación artificialmente bajo que fue negociado con Argentina en 1986, limitó también sus ingresos y YPF no pudo expandir su capacidad. “Se descapitalizó la empresa estatal” explicó el académico boliviano Carlos Villegas Quiroga, que después fue ministro de Energía del gobierno de Evo Morales en 2006. “No tenía recursos para invertir en exploración, explotación, producción u otro tipo de actividades.”<sup>41</sup> Estas movidas sentaron las bases de su desmantelamiento unos años más tarde.

### III. Capitalización, privatización con nuevo nombre

La noche del 17 de octubre de 2003, la nación entera estaba pegada a los canales de la televisión y radio cuando Gonzalo Sánchez de Lozada presentó su renuncia como presidente de Bolivia y abordó un avión hacia Miami, dejando un país en caos.

Durante meses, los disturbios políticos explotaron en las calles en muchas ciudades de Bolivia por la política económica de Sánchez de Lozada, convirtiéndolos en la conocida Guerra del Gas de 2003. Después de que las acciones represivas del gobierno contra las protestas por la propuesta gubernamental de exportar gas (que dejaron más de 60 muertos y 400 heridos), se puso en

movimiento un levantamiento popular que derrocó a dos gobiernos y cambió dramáticamente el curso político del país.

10 años antes, en 1993, Sánchez de Lozada era el propietario de minas más rico del país y había puesto sus expectativas en ganar las elecciones presidenciales de Bolivia. La economía estaba en mal estado y Sánchez de Lozada, educado en Estados Unidos, ofreció una solución. Como ministro de Economía y Planificación, en 1985, impulsó una nueva ola de reformas económicas neoliberales. Haciendo equipo con un grupo de planificadores económicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), Sánchez de Lozada se propuso llevar a esas reformas a un nivel sin precedentes.<sup>42</sup> El Banco Mundial y el FMI lo llamaron “el modelo boliviano”, Sánchez de Lozada lo llamó “la capitalización.”

El programa de capitalización de Sánchez de Lozada prometía crear medio millón de puestos de trabajo en cuatro años, doblar el tamaño de la economía en 10 años y financiar un nuevo plan de pensiones para los jubilados de Bolivia.<sup>43</sup> El plan ayudó a impulsar a Sánchez de Lozada a su primer término como presidente (1993-1997). En esa época se entregaron a las corporaciones extranjeras las industrias estatales más estratégicas, entre ellas, la de hidrocarburos.

La revisión completa del sector petrolífero y gasífero boliviano se basó en la creencia básica de la economía neoliberal: el desarrollo requiere de inversión extranjera, y para atraerlas se tiene que ofrecer un acuerdo atractivo. En muchos países latinoamericanos los ‘acuerdos atractivos’ fueron la privatización de empresas del Estado a precios de ganga y el ablandamiento de las regulaciones gubernamentales para las compañías extranjeras. Pero los bolivianos habían tenido en el pasado amargas experiencias con la privatización y estaban decididos a no perder el control de sus más importantes recursos y servicios públicos. Entonces, la capitalización de Sánchez de Lozada propuso algo diferente: la transformación de las compañías estatales en sociedades compartidas entre el sector público y el privado que generarían aumento de inversiones y de ingresos para el Estado.

Los activos de YPFB fueron divididos en tres nuevas compañías capitalizadas: Transredes, Chaco, y Andina. Sánchez de Lozada prometió a los bolivianos que el Estado mantendría el control del 51% de las nuevas compañías, mientras las corporaciones extranjeras tendrían sólo el 49% de participación.<sup>44</sup> En vez de pagar al gobierno por sus acciones en los nuevos negocios, las compañías extranjeras se comprometieron a invertir el mismo valor monetario en la nueva compañía durante los próximos siete años.

Además de dividir YPFB, como parte de una nueva ley sobre petróleo y gas escrita en estrecha coordinación con el FMI y el Banco Mundial, Bolivia entregó sus derechos de explotación de las reservas hidrocarburíferas que más tarde serían valuadas en más de 100 000 millones de dólares. Y para hacer la oferta aún más atractiva para los inversores, el gobierno redujo los impuestos y las regalías que las compañías debían pagar por su producción, de 50% a 18%.<sup>45</sup>

## Promesas de capitalización versus resultados

A los bolivianos se les vendió la capitalización con osadas promesas: las empresas mixtas le permitirían al gobierno mantener el control de sus recursos petroleros y gasíferos, mientras las inversiones extranjeras duplicarían el potencial económico de la industria; la nueva tecnología y una mayor eficiencia traerían nuevos ingresos, puestos de trabajo y crecimiento económico. El resultado real del experimento de la capitalización, sin embargo, mostró una figura muy diferente.

### *El mito de retener el control*

Con la capitalización, el gobierno boliviano y su pueblo perdieron el control de su empresa estatal más rentable, YPF, así como también su capacidad de regular la industria de hidrocarburos como un todo. En un esfuerzo por endulzar la oferta a los inversores extranjeros, en vez de mantener la mayoría de las acciones en las empresas capitalizadas, la prometida división de 51%-49% hecha por Gonzalo Sánchez de Lozada se volcó en su cabeza, y las empresas transnacionales obtuvieron el control mayoritario.

El consorcio de *Enron* y *Shell* fue premiada con la compañía Transredes, la cual tomó control de los ductos y de la infraestructura de distribución. A *British Petroleum* y Repsol, de España, se les dio el control de las nuevas compañías de exploraciones y producción, Chaco y Andina, y se le entregó también equipos, infraestructura y estudios geológicos de YPF sin costo alguno. Las transnacionales también obtuvieron el control de las reservas de petróleo y gas valuadas en aproximadamente 12 000 millones de dólares.<sup>46</sup> Incluso la minoría de las acciones que Bolivia tenía en las empresas capitalizadas no era suya. Las acciones bolivianas fueron entregadas a dos compañías extranjeras para que administraran los nuevos fondos de pensiones para los jubilados del país. Los administradores de aquellos fondos eran nombrados por las compañías extranjeras petroleras. Como lo explicó un analista:

Bajo este esquema, [los inversionistas extranjeros] no sólo son propietarios del 51% sino del 100%, ya que ellos controlan y administran la totalidad de las compañías capitalizadas, sin participación del socio minoritario: los bolivianos.<sup>47</sup>

El gobierno no sólo renunció a su capacidad y derecho de tomar decisiones sobre las firmas capitalizadas, sino que también renunció a su rol regulador de toda la industria. La autoridad reguladora del gobierno fue reemplazada por entidades 'independientes' de terceros que se basaban en los informes escritos por las mismas compañías extranjeras de cuánto petróleo y gas habían extraído y exportado, determinando los impuestos y pagos de regalías con los cálculos hechos por las propias compañías. Era el equivalente a dejar una nota pegada

a la puerta que diga: “entren, tomen lo que quieran y dejen el dinero sobre el mostrador.” Aunque la disminución de la corrupción y el mejoramiento de las prácticas medioambientales fueron ofrecidos como motivo de la capitalización, el contrabando de gas y la evasión de impuestos continuaron e incluso aumentaron, como lo hicieron los derrames y otros accidentes ambientales.<sup>48</sup> (Para mayor información sobre el derrame de Shell-Enron, en enero del 2000, ver el Capítulo 2.)

### *El mito de lo que las nuevas inversiones traerían*

Bolivia vivió un dramático incremento de las inversiones extranjeras durante la capitalización, pero esas inversiones no condujeron a una modernización de la industria o a la generación de industrias creadoras de nuevas fuentes de trabajo. Las compañías extranjeras que tomaron control de la industria hidrocarburífera de Bolivia encontraron más beneficioso exportar el gas natural como materia prima barata para ser procesada por sus afiliados en Argentina y Brasil. Por no estar obligados a hacerlo debido a lo que estipulaban los contratos, nunca invirtieron en el mejoramiento de la infraestructura doméstica o en capacitación técnica. Las dos refinerías más importantes del país que operan hoy, por ejemplo, fueron construidas por YPF antes de la capitalización y no han sido mejoradas considerablemente desde entonces.<sup>49</sup>

Los defensores de la capitalización alegan frecuentemente que el aumento de las inversiones extranjeras incrementó las reservas certificadas de petróleo y gas en 12 veces. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las reservas ya habían sido descubiertas antes de la capitalización pero no habían sido certificadas por agencias internacionales.<sup>50</sup>

Las compañías petroleras que operaron en Bolivia durante la era de la capitalización recibieron un promedio de ganancia sobre su inversión de diez a uno, beneficiándose de uno de los costos de producción más bajos del mundo.<sup>51</sup> Sin embargo, esas ganancias nunca llegaron a cumplir las promesas de crecimiento y desarrollo. En vez de crear medio millón de nuevos puestos de trabajo, entre 50% y 70% del personal de YPF fue despedido, uniéndose a los miles de trabajadores desempleados de otras industrias capitalizadas, de las industrias manufactureras y de las firmas de tecnología que habían abastecido a esas industrias.<sup>52</sup> El porcentaje de desempleo formal que se ubicaba en 3% antes de la capitalización en 1994, subió a 11,7% en 2003, mientras la brecha entre ricos y pobres se amplió en la década de los años 90.<sup>53</sup>

### *El mito del aumento de los ingresos públicos*

La promesa de Sánchez de Lozada de que la capitalización traería mayores ingresos al gobierno nunca se llevó a efecto. Las compañías capitalizadas que

adquirieron las acciones de YPFB generaron menos de la mitad de los ingresos que generaba YPFB.<sup>54</sup> Aunque Bolivia estaba produciendo 135% más de petróleo y gas después de los primeros siete años de capitalización, los ingresos del sector hidrocarburífero sólo crecieron 10%.<sup>55</sup> A pesar de que los recursos naturales no renovables estaban agotándose, los ingresos hidrocarburíferos del gobierno se mantuvieron estáticos esencialmente.

También porque el proceso de capitalización eliminó la capacidad gubernamental de establecer los precios de los productos hidrocarburíferos, tales como el combustible para cocinar o el diesel, los precios de los combustibles comunes aumentaron entre 70% y 100%.<sup>56</sup> El gobierno respondió a esta situación aplicando subsidios a los combustibles para mantener los precios accesibles a los consumidores, poniendo una fuerte presión sobre los recursos gubernamentales.

### **La privatización de la corrupción**

Por último, el proceso de la capitalización no sólo fue una mala política económica sino que también estuvo plagado de corrupción. Uno de sus más flagrantes casos involucró a Enron, más de cuatro años antes de que el nombre de la empresa llegara a ser sinónimo de corrupción corporativa. Sin poner ni un centavo en inversiones, la Enron cabildó exitosamente a Sánchez de Lozada para obtener el control del proyecto energético boliviano más importante, el gasoducto Bolivia-Brasil.<sup>57</sup> Investigaciones posteriores revelaron que el gasoducto terminado incluía un ramal adicional que abastecía de gas directamente a la mina de Sánchez de Lozada, ubicada al Este de la frontera boliviana.<sup>58</sup>

La estructuración del plan de capitalización de Bolivia y la nueva ley sobre los hidrocarburos involucró laboriosas consultas con inversores extranjeros y prestamistas internacionales. Sin embargo, los bolivianos y el Congreso fueron silenciados en la oscuridad. Los contratos petroleros, así como las operaciones y las finanzas de las compañías capitalizadas fueron considerados como información confidencial. A la mayoría de los bolivianos –incluso a la mayoría de la comunidad empresarial nacional– la capitalización les dejó un sabor amargo.

“Personalmente, me siento engañado,” dijo Enrique Menacho Roca, ex presidente de la Cámara de Hidrocarburos, que representa a las compañías domésticas y extranjeras que operan en Bolivia.

“Yo percibí la capitalización como una mejor forma de operar y producir, donde 50% iba a ser de la empresa capitalizada y 50% para los bolivianos, pero después vino el gran engaño... No hubo una participación boliviana de verdad. Para mí... fue una gran decepción.”<sup>59</sup>

Una década después de que la capitalización fuera inventada como un slogan para una campaña política, el escenario estaba listo para una gran rebelión cívica en su contra.

## IV. Estalla la guerra del gas

El 11 de octubre de 2003, David Salinas Malléa, de 29 años de edad, recibió un impacto de bala de un soldado boliviano en la extendida y altiplánica ciudad de El Alto. En cualquier otro día, se hubiera podido ver a David trabajando como albañil o en su tiempo libre jugando fútbol con su hermano menor, Néstor, en la ciudad que se asienta en lo alto de un acantilado con una amplia vista de la sede de gobierno, La Paz. Pero el 11 de octubre de 2003, el barrio de Néstor y David se convirtió en un campo de batalla. Miles de *alteños* (residentes de El Alto) tomaron las calles en protesta porque el presidente Sánchez de Lozada planeaba exportar gas barato a Estados Unidos, a través del histórico rival de Bolivia, Chile. Los residentes de El Alto bloquearon los caminos cortando la provisión de alimentos y combustibles a la ciudad que se halla más abajo. El presidente llamó a las Fuerzas Armadas para que desbarataran las protestas.

Seis días después, las protestas en El Alto se habían propagado por todo el país demandando tanto la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos del país como la renuncia del presidente de la nación. Cuando Sánchez de Lozada finalmente abandonó del país, dejó atrás más de 60 muertos, entre ellos, a David Salinas.

### El plan de Sánchez de Lozada para el gas

El acuerdo de exportación de gas que encendió la mecha de la Guerra del Gas de 2003 había estado en negociaciones desde 2001, cuando el entonces presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) empezó conversaciones con dos compañías respecto a la exportación de gas licuado boliviano a California: *Pacific LNG*, un consorcio conformado por Repsol, British Gas, British Petroleum y Total de Francia; y Prisma, la compañía que tomó control de los activos de Enron después de su colapso. Pero el plan no era un acuerdo simple. Debido a que Bolivia es un país sin acceso al océano, el gas tenía que ser transportado al Pacífico, y Chile era la ruta más cercana y por ende la más barata para llegar al mar.

Sin embargo, estaba garantizado que la exportación del gas a través de Chile iba a encontrar una oposición importante. Existe una fuerte animosidad histórica hacia dicho país entre los bolivianos, debido a que se apropió de la costa marítima boliviana en una guerra librada en 1879. Cuando las noticias del acuerdo potencial se hicieron públicas, se convirtió en la antorcha de lucha por el creciente descontento económico de los bolivianos. Después de siglos de perder los beneficios de sus recursos en manos de los extranjeros, los bolivianos vieron que la venta del gas a través de Chile iba a ser otro ‘Cerro Rico’.

Bajo la presión del embajador estadounidense para que se acepten precios bajos de venta, Sánchez de Lozada estuvo de acuerdo en cobrar sólo la mitad de lo que Brasil estaba pagando por el gas boliviano.<sup>60</sup> De acuerdo a una estimación,

a pesar de que la ganancia corporativa estaba proyectada en casi 1 900 millones de dólares anualmente, Bolivia sólo recibiría 190 millones.<sup>61</sup> La compañía extranjera que transportaría el gas boliviano por Chile a México, ganaría 1 000 millones de dólares al año.<sup>62</sup> Muchos bolivianos vieron los recursos del gas del país como una ventaja para negociar la recuperación de una salida marítima con Chile, país escaso en energéticos. Estaban enfurecidos con la idea de que Chile iba a recibir el gas boliviano sin que a cambio Bolivia consiguiera acceder al mar.<sup>63</sup>

## La Guerra del Gas

A principios de septiembre de 2003, los disturbios civiles crecieron alimentados por una serie de asuntos económicos y sociales, y las calles fueron tomadas por mineros, trabajadores fabriles, transportistas, universitarios, cocalleros y otros. Las protestas se extendieron por El Alto, Oruro, Sucre, Potosí y otras ciudades de Bolivia.<sup>64</sup> En respuesta, Sánchez de Lozada ponía cada día más su confianza en la acostumbrada “mano dura” del entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.<sup>65</sup>

El 20 de septiembre, el gobierno desplegó un contingente militar para despejar los bloqueos de caminos que se realizaban en la región rural del altiplano en protesta por el apresamiento de un líder indígena local. Los bloqueos dejaron atrapados a un número grande de turistas extranjeros y bolivianos en las carreteras. La represión militar dejó cinco muertos y 29 heridos. Entre los muertos se encontraba la niña Nancy Rojas, de ocho años de edad, que había fallecido por un impacto de bala en el pecho, disparado por el ejército y que entró por la ventana de su casa.<sup>66</sup>

La represión del gobierno solo aumentó y consolidó las protestas, y la propuesta venta de gas emergió como un símbolo del descontento hacia Sánchez de Lozada y sus fallidas promesas económicas. Los movimientos sociales se basaron en cuatro demandas importantes sobre los hidrocarburos: que el gobierno tomara control de la industria; que se creara un programa de industrialización; que se revisaran las leyes sobre los hidrocarburos emitidas por Sánchez de Lozada, y que se realizara un referéndum sobre la exportación del gas. En El Alto se declaró una huelga general con paro de actividades. Cientos de mineros empezaron a marchar hacia la sede de gobierno. La mayoría de los caminos hacia La Paz estaban bloqueados. Las provisiones de alimentos y gas empezaron a escasear.

El sábado 11 de octubre, Sánchez de Lozada decidió levantar por la fuerza los bloqueos de las principales rutas que conducen a La Paz.<sup>67</sup> El presidente emitió un decreto presidencial declarando emergencia nacional “para garantizar el abastecimiento normal de combustibles” hacia La Paz. Sánchez Berzaín ordenó la militarización de El Alto.

Al ver su ciudad sitiada, los alteños empezaron a movilizar a la gente barrio tras barrio a través de la asociación vecinal FEJUVE. Los residentes cavaron zanjas



para evitar el paso de los vehículos militares. Muchos de ellos tomaron turnos para hacer vigilias por la noche.

Cuando el convoy de tanques militares, de cisternas de gas y de camiones llenos de soldados empujaba las barricadas de rocas y llantas ardiendo para avanzar hacia La Paz, los habitantes de El Alto usando palos y hondas ofrecieron resistencia. El ejército respondió al principio con gases lacrimógenos y balas de fogueo, pero después utilizó balas reales. “Empezaron a disparar a las casas y a cualquier ser humano,” recordaba Néstor Salinas. “Imagine a niños de sólo cinco años, niñas de ocho años, mujeres embarazadas, hombres, hermanos, padres, jóvenes,” continuó Néstor. “Todos ellos murieron.”<sup>68</sup>

En uno de los barrios de El Alto, David, el hermano de Néstor, corría por las calles buscando a su hermano menor, Raúl, que había sido visto jugando cerca de las protestas. Cuando David se detuvo para ayudar a una persona herida en la calle, una bala disparada por un soldado entró por su abdomen y salió justo por encima de su pierna. Néstor estaba ayudando a transportar gente herida al hospital local cuando escuchó que su hermano David había sido alcanzado por un disparo. Cuando Néstor encontró a David, le dijeron que no había un anestesista y que el personal del hospital no tenía suficientes manos para atender a todos los heridos que ingresaban. Fuera del hospital, Néstor podía escuchar los disparos. Rogó al personal que hiciera algo por su hermano, pero después de dos cirugías sin éxito, David murió una semana después.<sup>69</sup>

Poco tiempo después de las muertes del 11 de octubre, la demanda de la nacionalización del gas se convirtió en un llamado a la renuncia del presidente. El vicepresidente Carlos Mesa rompió relaciones con Sánchez de Lozada por el uso de la fuerza gubernamental, y declaró: “Me han preguntado si tengo valor de matar y mi respuesta es no, ni tendré mañana, por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al Gobierno.”<sup>70</sup>

Para el domingo 12 de octubre, 26 personas más habían muerto.<sup>71</sup> La disciplina entre los soldados y las fuerzas policiales exhaustas empezó a romperse. La clase media boliviana, y cada vez más la elite, se unió a la demanda de la renuncia del presidente. Cientos de intelectuales, artistas y empleados públicos empezaron huelgas de hambre por todo el país.

El lunes 13 de octubre, el embajador estadounidense, David Greenlee, reafirmó el apoyo de la administración Bush a Sánchez de Lozada. “Estamos muy preocupados por el ataque a la democracia y al orden constitucional en Bolivia”, declaró el embajador. “Palos y piedras no son una forma de protesta pacífica.”<sup>72</sup> La Organización de Estados Americanos (OEA) también ofreció su “franco y decidido” apoyo al presidente. Al final del día se informó que otras 28 personas fueron muertas.<sup>73</sup> El martes, con las ciudades paralizadas a lo largo del país por las protestas, la administración Bush reforzó su apoyo a Sánchez de Lozada, alabando sus “esfuerzos por construir un futuro más próspero y justo para los bolivianos,” y advirtió que ningún otro gobierno sería reconocido por Estados Unidos.<sup>74</sup>

El jueves 16 de octubre, 300 000 personas marcharon en la plaza colonial de San Francisco, en La Paz.<sup>75</sup> Cientos más se unieron a las huelgas de hambre. Representantes de las embajadas de Argentina y Brasil urgieron a Sánchez de Lozada que renunciara.<sup>76</sup> Protestas solidarias eran realizadas fuera de las embajadas y consulados de Bolivia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El país estaba en una encrucijada: el presidente hacía caso a la demanda por su renuncia o el país sería consumido por el violento conflicto.

El viernes 17 de octubre, Sánchez de Lozada envió un fax con su renuncia al Congreso de Bolivia y abordó entonces un avión hacia Miami. En los últimos dos meses de su presidencia el número de víctimas alcanzó a 67 personas.<sup>77</sup>

Esta tarde, la televisión boliviana, con la pantalla dividida, mostraba por un lado el avión rodando en la pista de aterrizaje llevando a Sánchez de Lozada a su eventual refugio político en los suburbios de Washington DC, mientras que en el otro lado, se mostraba el palacio legislativo en La Paz, mientras Carlos Mesa hacía un solemne juramento que lo convertía en el 64<sup>o</sup> presidente de Bolivia. Dibujando un marcado contraste entre él y su antecesor, Mesa pidió a los miembros del Congreso reunido, que se hiciera un minuto de silencio en honor a aquellos que “ofrendaron su vida por la patria, por la democracia, por el futuro y por la vida.”<sup>78</sup>

La Guerra del Gas de 2003 que derrocó al gobierno, trataba sobre algo más que sólo el gas del país. Era un rechazo al sistema político que se había transformado en dar alegremente la bienvenida a una política económica escrita en otro lugar para el beneficio de otros. Mientras el antiguo sistema político y económico estaba siendo despojado de su última legitimidad, los movimientos sociales que habían dirigido las protestas presentaron su propia agenda. Fue conocida como la Agenda de Octubre e incluía la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente que reescribiera la Constitución Política del Estado, y un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por las muertes de septiembre y octubre de 2003.

### **Luchando contra la impunidad: otro legado de la Guerra del Gas**

Para quienes han perdido algún miembro de su familia en la Guerra del Gas de 2003, las luchas callejeras fueron sólo el principio. Como muchas otras naciones de Latinoamérica, Bolivia ha tenido una trágica historia de gobiernos que han escapado a sus responsabilidades por la violación de los derechos humanos. La Asociación de Familias de los Caídos en Defensa del Gas, junto a otros grupos de derechos humanos bolivianos, está asegurándose que no continúe la impunidad en el caso de las muertes de 2003.

De los 60 muertos en septiembre y octubre de 2003 en manos de las fuerzas gubernamentales, la gran mayoría recibió impactos de bala en la cabeza, el pecho o en la región abdominal, lo cual demuestra que el objetivo de los soldados y la

policía no era minimizar las fatalidades.<sup>79</sup> Muchos de los más de 400 heridos sufrían heridas severas, pérdida de miembros u otro tipo de incapacidad y a la larga no tendrán la capacidad de proveer medios de vida para ellos mismos o sus familias. “Ellos dicen ‘La Guerra del Gas.’ Yo digo, ¿Qué guerra?” contradijo Néstor Salinas. “Era una masacre.”<sup>80</sup>

El gobierno boliviano y las familias de las víctimas de octubre de 2003 están trabajando para conseguir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague Alcócer, quienes actualmente residen en Estados Unidos, para enfrentarse a un juicio por violaciones de los derechos humanos cometidos entre septiembre y octubre de 2003.

“Si buscamos el encarcelamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, es para sentar un antecedente en el país, de que estos tipos de delitos deben ser castigados y no deben quedar en el impunidad,” concluyó Salinas.<sup>81</sup>

## V. El camino del medio

El 19 de octubre de 2003, miles de personas se manifestaron en la plaza San Francisco de La Paz después de la salida de Sánchez de Lozada. El antiguo analista de noticias de televisión y respetado historiador, Carlos Mesa, llegó de forma imprevista y pidió hablar a la multitud. Frente a un mar de gente que dos días antes había derrocado al gobierno del país, el nuevo presidente les pidió su apoyo. Mesa se comprometió a llevar a cabo cuatro iniciativas: un referéndum nacional sobre la venta del gas; la modificación de la ley de hidrocarburos emitida por Sánchez de Lozada; una revisión del proceso de capitalización; y una convocatoria a una asamblea constituyente.

Cuando Mesa se desmarcó tajantemente de Sánchez de Lozada debido al uso excesivo de la fuerza armada, no estaba buscando una separación radical de la política existente. El nuevo presidente de Bolivia quería asegurar más ganancias para el Estado a través de una reforma legislativa, pero se oponía a una nacionalización de los hidrocarburos y fue cauteloso en meterse en los contratos existentes por temor a ahuyentar la inversión extranjera.

Pese a que Mesa disfrutó de índices de aprobación de 60% a 70% durante sus primeros meses como presidente, rápidamente se encontró constreñido por poderosas fuerzas opuestas.<sup>82</sup> FEJUVE de El Alto, los sindicatos de trabajadores y un movimiento indigenista en crecimiento continuaron con las demostraciones y las huelgas de protesta demandando el cumplimiento de la Agenda de Octubre y la nacionalización del gas. Un poderoso movimiento dirigido por el sector empresarial y la elite política del centro de la industria hidrocarburífera, el departamento de Santa Cruz, empezó a demandar autonomía y mayor control sobre sus recursos locales.

Carlos Villegas describió este bloque político conservador compuesto por petroleras y las embajadas de sus países de origen, instituciones financieras

internacionales como el Banco Mundial y el FMI, los comités cívicos de los departamentos ricos en gas de Santa Cruz y Tarija, y la Cámara de Comercio Boliviana:

Todos conformaron un bloque con una importante presencia que decía... “No aceptaremos cambios en los contratos de gas.”... Llegó Rodrigo de Rato [director-gerente] del Fondo Monetario Internacional y dijo que los organismos multilaterales no aceptarían cambios en las reglas del juego y si eso ocurría ellos iban a cortar toda la cooperación a Bolivia.<sup>83</sup>

En medio de estas fuerzas en pugna, Mesa eligió tomar el camino del medio. Rechazó a los partidos políticos tradicionales e intentó gobernar apoyado en su extensa base de apoyo público. Pero aquellos partidos todavía manejaban una mayoría en el Congreso, dejando a Mesa sin aliados para impulsar su agenda. Mesa realizó una alianza con el congresista Evo Morales, el líder de los cocalleros que jugó un papel en las protestas contra Sánchez de Lozada. Morales estaba ahora buscando distanciarse de los grupos de protesta más radicales para ganar un apoyo mayoritario a su Movimiento al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones municipales. Mesa, sin embargo, veía que esa alianza pronto le fallaría.

## El referéndum

El primer acto del presidente sobre el tema del gas fue realizar un referéndum nacional. El propósito de Mesa era establecer un mandato político claro para su nueva política sobre los hidrocarburos. El voto nacional de julio de 2004 trataría sobre la abrogación de la ley de capitalización, una propuesta para reconstruir la empresa petrolera del Estado, la recuperación estatal de la propiedad de los hidrocarburos, y si Bolivia debía o no exportar su gas.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con base en La Paz, sostiene que las preguntas del referéndum estaban intencionalmente redactadas para asegurar una respuesta positiva, pero también eran tan ambiguas que “votar por el Sí no significaba necesariamente cambiar la política o continuar con ella.”<sup>84</sup> Muchos grupos, incluyendo a sindicatos, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y la Coordinadora de Defensa y Recuperación del Gas, boicotearon la votación.<sup>85</sup>

Cuatro meses antes de la votación del referéndum, el FMI anunció que un préstamo muy necesitado por 150 millones de dólares dependía de los resultados del referéndum, advirtiendo que una respuesta negativa a la exportación del gas “no sería entendida por los gobiernos” que apoyan a Bolivia.<sup>86</sup>

El 18 de julio de 2004, el resultado final de la votación logró exactamente lo que Mesa había esperado. Todas las cinco preguntas fueron aprobadas por una clara mayoría a favor. El 92% votó para que el Estado recuperara la propiedad

de los hidrocarburos, el 87% para que se derogara la ley sobre los hidrocarburos de Sánchez de Lozada, y el 62% votó por el “sí” a la exportación del gas.<sup>87</sup> Pero la victoria de Mesa tuvo una corta vida. Cuando llegó la hora de traducir el referéndum en una nueva ley, ni la mayoría conservadora en el Congreso ni el MAS apoyaron la propuesta de Mesa, y se inició una larga lucha de un año acerca de la nueva legislación.

### Una nueva ley de hidrocarburos

La propuesta de Mesa sobre una nueva ley de hidrocarburos dejó esencialmente sin cambios todos los contratos existentes con las empresas extranjeras. El presidente propuso, en cambio, una fórmula compleja que aumentaría los impuestos de los hidrocarburos para ciertos campos dependiendo de su tamaño, pero dejando otros sin modificaciones. La contrapropuesta del MAS buscaba la renegociación de los contratos y una regalía sin excepciones de 50% para la explotación del petróleo y el gas. Los partidos tradicionales en el Congreso echaron el grito al cielo diciendo que ambas propuestas habían ido demasiado lejos, mientras que FEJUVE y los otros movimientos sociales las criticaron por insuficientes.

Después de meses de impasse político, el 6 de marzo de 2005, Mesa sorprendió a la nación ofreciendo su renuncia al Congreso. Irrumpieron protestas espontáneas urgiendo al presidente a que se quedara. Resultó ser una conspiración de sentido común de relaciones públicas: el Congreso rechazó la renuncia y prometió aprobar una legislación de hidrocarburos. Pero mientras Mesa trataba de fortalecer su apoyo público, en términos de opciones políticas él mismo se había amarrado las manos. Ese mismo mes, para asegurar la aprobación del paquete anual de préstamos del FMI, Mesa prometió a los funcionarios de dicha institución que no renegociaría los contratos de hidrocarburos.<sup>88</sup>

El 7 de mayo, después de meses de tensas negociaciones, el Congreso finalmente aprobó una nueva ley de hidrocarburos, en su mayor parte dentro de la línea de los partidos tradicionales, a pesar de la importante oposición del MAS y de otros partidos políticos minoritarios.<sup>89</sup> La nueva legislación requeriría la renegociación de los contratos existentes dentro de 180 días y añadiría un nuevo impuesto de 32%, que se sumarían a los 18% por regalías, suma que sería dividida entre las regiones departamentales de Bolivia, municipalidades, universidades, comunidades indígenas, ejército y policía, y el tesoro nacional.

Inmediatamente el Banco Mundial y el FMI advirtieron que la nueva ley podría causar una fuga de la inversión extranjera, advertencias que encontraron eco en los movimientos de autonomía de Santa Cruz. Las petroleras multinacionales amenazaron con iniciar juicios legales. Mesa hizo malabarismos para encontrar una manera de reescribir la legislación. Decidió rehusarse a firmar o vetar la legislación, llevando la decisión al presidente del Senado, Hormando

Vaca Díez, quien hizo aprobar la nueva ley de hidrocarburos, el 17 de mayo, sin el apoyo del presidente de la República.

Desde el principio, los movimientos sociales de Bolivia rechazaron tajantemente la nueva ley, considerándola una distorsión de los resultados del referéndum y una traición a la Agenda de Octubre. Criticaron la ley por quedarse corta tanto acerca de la nacionalización como de la reconstrucción de la empresa del Estado. Aunque la ley permitía a YPFB participar en cada paso de la cadena productiva, no se le dio la autoridad ni los recursos necesarios para hacerlo. Debido también a un anexo insertado en la nueva ley, el nuevo esquema de impuestos y regalías en realidad quedaría bastante más corto que la regalía del 50% que existía antes de la capitalización.<sup>90</sup> Aunque el MAS había facilitado el borrador original de la nueva ley de hidrocarburos, se opuso a la versión final debido a su estructura impositiva.<sup>91</sup>

A fines de mayo de 2005, a pesar de que se aprobó la nueva ley sobre hidrocarburos, la ola de apoyo a la nacionalización había tomado un momento político poderoso. Mientras que otros líderes de la izquierda llamaban al control total de la industria y la expulsión de las compañías extranjeras, Morales, sin embargo, seguía hablando sobre las reformas impositivas. Morales y el MAS se quedaron rápidamente atrás de los movimientos sociales más radicales que escenificaban masivas protestas exigiendo la nacionalización, y criticaron a Morales por hacer concesiones. Para fines de mayo, el MAS realizó una jugada política para ponerse al día y adoptó el llamado a la nacionalización, y movilizó a sus bases aunque su posición política permaneció básicamente sin cambio.

## Las secuelas

El enfoque centrista de Mesa sobre el referéndum y el compromiso por la ley de hidrocarburos encendieron la chispa que renovó los disturbios políticos. La Paz se encontró otra vez paralizada por las protestas. Circularon rumores sobre una guerra civil o un golpe de Estado. Carlos Rojas, miembro del comité ejecutivo de la FEJUVE, explicó la frustración que sentían quienes estaban en las calles:

No es que hayamos dicho solamente ‘queremos la nacionalización’. No era sólo un discurso: hemos planteado un proyecto de ley pero no ha sido escuchado. Por ese motivo, en abril, cuando vimos que el Congreso todavía estaba insistiendo en aprobar una nueva ley de hidrocarburos que favorecía a las multinacionales, hemos empezado esta lucha.<sup>92</sup>

El 6 de junio, en medio de una creciente crisis, Mesa ofreció su renuncia al Congreso por segunda vez, diciéndole a la nación, “hasta aquí, es cuán lejos puedo llegar.”<sup>93</sup> Esta movida de Mesa puso en movimiento una lucha caótica por el poder. Los candidatos que constitucionalmente podían ser presidentes eran el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, y el presidente de la Cámara de Diputados,

Mario Cossío Cortéz, ambos miembros de la coalición partidaria tradicional que gobernaba junto a Sánchez de Lozada. Enfrentados a la posibilidad de retornar a los políticos de siempre, los bolivianos de diferentes condiciones sociales se unieron en protestas para exigir que ninguno de los dos asumiera la presidencia. El número de protestas creció. El Congreso no se pudo reunir para determinar la transición presidencial porque una vez más La Paz estaba bloqueada por las protestas. El Alto estaba en un paro general indefinido. Los guaraníes del Este boliviano tomaron siete campos de gas.<sup>94</sup> Los bloqueos de carreteras paralizaron ocho de los nueve departamentos del país.<sup>95</sup> Mesa suplicó públicamente a Vaca Diez que diera un paso atrás para prevenir mayores conflictos civiles. La clase media se sumó al llamado, mientras que los alcaldes de las ciudades grandes entraron en huelga de hambre junto a los rectores de las universidades y otros profesionales.

Los historiadores de cultura andina de la Universidad de Nueva York, Forrest Hylton y Sinclair Thompson, describieron así la escena en La Paz por aquellos días de crisis:

El 6 de junio, entre 400 000 y 500 000 manifestantes, mayormente de descendencia aymara, fluían de El Alto hacia el corazón de la capital [sede de gobierno]. Unos 20 camiones llenos de campesinos de la comunidad Aroma llegaron con garrotes, piedras y hondas. Estaban acompañados por cientos de miles de paceños [habitantes de La Paz]... Los mineros anunciaron su presencia detonando cartuchos de dinamita. Una multitud desbordó la plaza San Francisco, y se dirigió después hacia la plaza Murillo con la firme intención de tomar el parlamento y ocupar el palacio presidencial.<sup>96</sup>

El presidente de la Cámara de Diputados, Cossío Cortéz, anunció que no tenía intenciones de asumir la presidencia, pero Vaca Diez, el siguiente en la línea de sucesión después de Mesa, estaba determinado a lograr su derecho político. El 9 de junio, trasladó el Congreso a la capital de la República, Sucre (sede del Poder Judicial), en el último intento por convocar a una sesión, pero los movimientos sociales convergieron también en la ciudad. Mineros manifestantes llegaron del departamento de Potosí, y junto a los trabajadores de aeropuertos (de AASANA) cerraron las operaciones aeroportuarias y dejaron varados a los miembros del Congreso. Parecía que se avecinaba un conflicto violento —ya quedaba en claro que una Bolivia dirigida por Vaca Diez sería ingobernable— mientras más frecuentes eran los llamados de varios líderes nacionales en contra de la presidencia de Vaca Diez, sucesor legal del presidente. Finalmente, la coalición gobernante en el Congreso se rompió. En el momento en que Vaca Diez se hizo a un lado, la presidencia de la República se quedó en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien era el próximo en la línea de sucesión, después de los presidentes del Senado y de Diputados. Esta situación impulsó también un requerimiento constitucional para convocar a nuevas elecciones a realizarse en el lapso de seis meses.

Los levantamientos de mayo y junio de 2005 fueron una clara continuación de la Guerra del Gas de 2003: una reafirmación de la incumplida demanda por la nacionalización y un rechazo a las reformas centristas impulsadas por Mesa y el Congreso. El mensaje era claro: los movimientos sociales demandaban cambios profundos en el orden económico y político. La transición presidencial de junio permitió al país dar un paso atrás del precipicio en el que se encontraba, pero no pudo situarlo en terreno sólido.

### La elección presidencial de 2005

La elección presidencial de diciembre de 2005 se centró en el tema del gas. Cada candidato trató de distanciarse de las políticas sin credibilidad o legitimidad del pasado y propuso cierto grado de recuperación del papel del Estado en la economía. El término “nacionalización” se hizo popular, pero con interpretaciones que diferían grandemente de un candidato a otro.

En el lado conservador del espectro, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga candidateó bajo la bandera del partido Poder Democrático Social (PODEMOS). Prometió “nacionalización de los beneficios del gas” aumentando las exportaciones, pero tratando de no asustar a los inversionistas extranjeros infringiendo la ‘seguridad jurídica’ que se les debía garantizar.<sup>97</sup> En el centro, Samuel Doria Medina, un prominente hombre de negocios y propietario de la licencia de *Burger King*, candidateó con el partido Unidad Nacional (UN). Doria Medina propuso recuperar el control de las empresas capitalizadas al recomprar acciones, puntualizando que lo que la gente entiende por nacionalización es “contar con más recursos para los bolivianos”, pero “no la expropiación.”<sup>98</sup>

En la izquierda, Evo Morales, quien había quedado con menos de 2% de la votación detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada en la elección de 2002, candidateó como la cabeza del partido MAS. Morales prometió “nacionalización e industrialización sin confiscación”, al reconstruir YPF y cambiar las relaciones contractuales de Bolivia con las empresas extranjeras.<sup>99</sup> Mientras utilizaba una permanente retórica de terminar con el modelo neoliberal y el saqueo de los recursos naturales de Bolivia, Morales se distanció intencionalmente de los candidatos y líderes de la izquierda más radical que proponían una “nacionalización sin indemnización,” y la expulsión de las compañías petroleras y gasíferas.

Las elecciones del 19 de diciembre de 2005, con un récord de concurrencia a las urnas de 84%, Morales sorprendió incluso a sus partidarios al conseguir el margen más alto de votación en la historia democrática contemporánea de Bolivia. Con un poco menos de 54% de los votos, Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país. Su apoyo fue más allá de las bases de campesinos y movimientos sociales e incluyó una gran parte de la clase media, incluso 33% de la históricamente conservadora Santa Cruz. Por primera vez en 20 años, el



presidente de Bolivia tenía un indiscutible mandato popular y podía gobernar sin necesidad de formar una coalición formal con otros partidos políticos.

La elección fue un inequívoco voto contra los partidos tradicionales y de apoyo a una nueva manera de conducir la política. En un discurso de inauguración muy emotivo, el presidente Morales habló de una nueva “revolución democrática” que cambiaría totalmente la historia neoliberal del país.

La capitalización solo ha descapitalizado al país. La capitalización, como yo la entiendo, es que hay que importar capital en vez de exportar capital. Pero... como resultado de estas políticas la única cosa que exportamos es gente... Hay que reconocer que esas políticas equivocadas, erradas, interesadas de dilapidar los recursos naturales y privatizar los servicios básicos necesitan una nueva conciencia del pueblo boliviano. Estamos en la obligación de cambiar estas políticas.<sup>100</sup>

## VI. Nacionalización por negociación

El primero de mayo de 2006, un olor denso a gas flotaba en el aire mientras una multitud eufórica de bolivianos celebraba en frente de la refinería de hidrocarburos brasileña, Petrobras, ubicada a pocos minutos de Cochabamba. Un trabajador del Estado, vestido de overoles color caki y casco, apoyó una escalera de madera en la parte delantera de la refinería, justo debajo de la señal que decía Petrobras. Ascendió por la escalera y cuando sustituyó el letrero de Petrobras por el de YPFB la multitud gritó ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la nacionalización!

Uno de los primeros actos de Morales como presidente fue anunciar la “nacionalización” de los hidrocarburos y las reservas de gas por medio de un decreto presidencial. El espectáculo mediático alrededor del decreto del primero de mayo (Decreto Supremo 28701, “Héroes del Chaco”), completado con banderas bolivianas y soldados armados, proveyó abundante forraje para un montón de informes de la prensa extranjera sobre que Morales estaba apoderándose del capital privado y estaba militarizando los campos gasíferos del país. Pero tan pronto como las cámaras se alejaron, los militares también lo hicieron y las compañías de petróleo y gas continuaron con sus operaciones regulares.

La política de “nacionalización” del gobierno en realidad era mucho más moderada que un plan de nacionalización clásica. El gobierno de Morales se ha mantenido fiel a su compromiso explícito de realizar una “nacionalización sin confiscación o expropiación.” El resultado es una mezcla de políticas para reinsertar a la empresa Estatal en la industria, y para la renegociación con las compañías extranjeras de contratos en condiciones más favorables para Bolivia. La política del gobierno se centra en cuatro objetivos principales: primero, reafirmar la propiedad del Estado sobre los recursos hidrocarbúricos, como se estipula en la Constitución, a través de un YPFB reconstituido; segundo, aumentar los ingresos gubernamentales por hidrocarburos mediante la renegociación de los

contratos de exploración y explotación; tercero, encontrar nuevos mercados de exportación y negociar precios más altos con Brasil y Argentina; y por último, aplicar una política de industrialización que permita a Bolivia utilizar su gas para desarrollar productos con valor agregado, tales como electricidad o plásticos.

Las reacciones al decreto del primero de mayo fueron contradictorias. Desde Santa Cruz y el FMI provinieron los gritos de protestas prediciendo fuga de capital y aislamiento político. El presidente estadounidense, George W. Bush, advirtió de una “erosión de la democracia”<sup>101</sup> Sin embargo, la mayoría de las reacciones fueron más moderadas. Los vecinos regionales, incluyendo a Brasil y Argentina, que importan gas de Bolivia, dieron su tácito apoyo al derecho boliviano de recuperar el control de sus recursos naturales mientras esperaban ver cuáles serían las políticas generales. Las petroleras extranjeras anunciaron el congelamiento de sus inversiones en Bolivia, pero continuaron operando. Los movimientos sociales consideraron que el decreto era un buen primer paso, pero expresaron su preocupación de que la política del gobierno no fuera lo suficientemente lejos. El pueblo en general recibió el decreto favorablemente y el índice de aprobación para Morales subió a 81%.<sup>102</sup> En los meses siguientes al anuncio del decreto, sin embargo, las críticas aumentaron mientras el gobierno pasaba por contratiempos logísticos y políticos para aplicar sus políticas.

En octubre de 2006 el gobierno firmó nuevos contratos con 10 compañías petroleras, cambiando sus obligaciones impositivas, y solidificando su permanencia en Bolivia por al menos 20 a 30 años más. Morales declaró que las negociaciones fueron un éxito. “Misión cumplida,” dijo el presidente en una declaración para la prensa cuando firmaron los contratos, “estamos consolidando la nacionalización de los hidrocarburos... sin expulsar a nadie y sin confiscar... [la propiedad privada] Entre 10 a 15 años, Bolivia ya no será ese país pobrecito, este país mendigo.”<sup>103</sup>

Algunos analistas advierten, sin embargo, que el gobierno de Morales no está consiguiendo tan buenos acuerdos para Bolivia como podría parecer. El profesor de economía de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Roberto Fernández Terán, describió la política de Morales de esta manera:

Evo está jugando a un proyecto político donde no quiere enemistarse con las empresas extranjeras. Morales dice “Vamos a nacionalizar de manera responsable, no vamos a expropiar, no vamos a afectar a las empresas.” Esta es una extraña forma de nacionalización, una nacionalización que no afecta a las empresas, que no expropia, donde las empresas están felices... es medio sospechosa.<sup>104</sup>

Otros criticaron al gobierno por que en su criterio continuaba enfocándose en la exportación de materias primas. Un importante líder del movimiento social de la rica región petrolera del Chaco describió a estas nuevas decisiones “contrarias a la nacionalización que el pueblo demandó.” Los movimientos sociales

en el Chaco se han enfrentado periódicamente con las fuerzas gubernamentales por las demandas de una “verdadera nacionalización.”<sup>105</sup> Sin embargo, muchos bolivianos, incluyendo muchos empresarios, hacen un análisis más pragmático. Ellos piensan que el gobierno está logrando un balance dentro del campo de juego establecido; recuperando más control e ingresos para el Estado mientras no asusta al capital extranjero.

Según Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Fallecidos en la Defensa del Gas, durante la Guerra del Gas de 2003, la propuesta del gobierno de Morales es la manera más “sensata” de llevar adelante la nacionalización:

Lo que queremos como bolivianos es poder contar con... mayor cantidad de recursos para poder desarrollar el país. Están haciendo eso y eso es muy importante para nosotros. Creo que están cumpliendo los objetivos que se trazaron en la Agenda de Octubre como la entendemos, pero esperamos que esto continúe de la misma manera como hasta ahora, y que se continúe profundizando mucho más todavía.<sup>106</sup>

### **Desafíos importantes**

En febrero de 2007, Evo Morales describió la “nacionalización” como una tarea a medio completar.<sup>107</sup> Al dirigir su política hacia la realidad, el gobierno enfrenta mayores desafíos. Entre ellos están la reconstrucción de la empresa estatal, captar más ingresos por la explotación de los hidrocarburos, negociar mejores acuerdos para la exportación, y asegurar inversión para la industrialización del gas para producir productos con valor agregado.

#### ***Reconstruyendo la empresa estatal de hidrocarburos***

En papel, el decreto del primero de mayo “recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia.<sup>108</sup> Sin embargo, la pregunta más importante permanece: ¿tendrá YPFB los recursos y la infraestructura necesarios para ejercitar efectivamente la propiedad de los hidrocarburos de la nación?

El meollo del plan del gobierno para reconstituir la empresa estatal de hidrocarburos es recuperar el control de las tres empresas capitalizadas que tomaron control de las tareas de exploración y transportación de YPFB, y de dos empresas privadas que compraron otras instalaciones petroleras y gasíferas bolivianas privatizadas en 1999. El decreto de nacionalización requiere que esas cinco empresas vendan al gobierno suficientes acciones como para contar con mayoría de acciones en cada empresa. En las tres compañías capitalizadas, el gobierno ya controlaba entre 31% y 45% de las acciones.<sup>109</sup> Para junio de 2007, el gobierno había logrado acuerdos para comprar y recuperar las refinerías

privatizadas de YPFB, pero todavía no ha recuperado el control mayoritario en las cuatro compañías restantes.

Los pasos dados por Bolivia para recuperar la mayoría accionaria en las cinco empresas, previamente propiedad del Estado, se han quedado cortos frente a las nacionalizaciones de 1937 y 1969. En ambas ocasiones, el gobierno tomó posesión completa –con compensación– de las compañías extranjeras. De hecho, el programa de Morales irónicamente está más cerca del programa que Sánchez de Lozada propuso originalmente como modelo para la privatización de 1992: empresas mixtas de riesgo compartido en las que el Estado se mantiene como mayor accionista. Algunos analistas cuestionan por qué el gobierno no cancela los contratos de concesión petrolera donde se han demostrado casos de contrabando de gas, evasión de impuestos o incumplimiento de las obligaciones contractuales. Medidas así permitirían al gobierno tomar completo control de las compañías capitalizadas sin tener que comprar acciones.

Si el gobierno recuperara la propiedad mayoritaria de las acciones, tendría los medios para participar otra vez en la cadena de producción completa. Pero esto no significaría que el gobierno tuviera verdadero control sobre las empresas. Así como puntualiza Robert Conrad, profesor asociado de estudios políticos públicos y economía en la Universidad de Duke, “si tú eres propietario del 51% de la compañía puede ser que tomes decisiones tácitas, pero de hecho puede que dependas de los inversionistas extranjeros para que se aprueben las decisiones” si la empresa estatal carece de capacidad técnica para tomar dichas decisiones por sí misma.

O uno tiene la capacidad de monitorear las inversiones y tomar las decisiones por uno mismo... o puede que la propiedad no tenga tanto sentido práctico en términos de asumir decisiones de inversión, o del flujo de dinero disponible que recibe el gobierno.<sup>110</sup>

Incluso si el gobierno fuera capaz de tomar control de las cinco empresas, estaría involucrado sólo en exploración y desarrollo de una pequeña fracción del total de las reservas del país. Repsol, Total y Petrobras manejarían las operaciones del 83% del gas boliviano y del 86% de las reservas de petróleo.<sup>111</sup> Sin recuperar el monopolio de la industria, es cuestionable si YPFB puede competir con los recursos económicos y la influencia política de las petroleras multinacionales ya establecidas hace un buen tiempo en el país.

### *Captando mayores ingresos*

Con los nuevos contratos de exploración y explotación firmados en octubre de 2006, el gobierno también instituyó un nuevo esquema de impuestos y regalías que establece que el gobierno recibe entre 50% y 80% de los ingresos por

hidrocarburos. Según cálculos oficiales, los nuevos contratos generarán 1 300 millones de dólares de ingresos por hidrocarburos, anualmente, empezando en 2007, casi triplicando los de 2004.<sup>112</sup> El gobierno estima que los ingresos continuarán aumentando y que para el año 2010 duplicarán los de 2007.<sup>113</sup>

Bajo los nuevos contratos, las compañías extranjeras extraen los hidrocarburos bolivianos, pero después se los entregan a YPF, quien maneja todas las ventas nacionales e internacionales, y paga los impuestos y regalías al gobierno, dividiendo la ganancia restante con las compañías. Ese es el plan en papel. Pero como parte de los nuevos contratos el gobierno acordó compensar a las compañías privadas por los “costos recuperables,” que incluyen al personal, y gastos legales y de publicidad e incluso los gastos incurridos por las sedes de las compañías trasnacionales. Mientras el gobierno teóricamente revisa los costos, éstos permanecen bajo las autoridades ejecutivas de las compañías, lo que aumenta la posibilidad de que tomen un gran bocado de los ingresos potenciales del gobierno.<sup>114</sup> De manera que, en efecto, los niveles actuales por nuevos ingresos son materia de proyecciones.

### *Asegurando mejores acuerdos de exportación*

La ubicación de Bolivia en el corazón de Sud América le provee muchos mercados potenciales de exportación. Actualmente Argentina y Brasil importan 5,4 millones de dólares de gas boliviano diariamente, mientras las expectativas son que la demanda del gas en Brasil se duplique para el año 2015.<sup>115</sup> En octubre de 2006, Argentina y Bolivia firmaron un acuerdo para construir un segundo gasoducto que cuadruplicará la exportación de gas a dicho país para el 2010. Además, Paraguay y Uruguay también han expresado su interés en importar gas boliviano. Puede ser que Chile sea el mejor mercado potencial dado su relativo aislamiento y falta de fuentes domésticas de energía. Sin embargo, la animosidad de larga data entre estos dos países continúa siendo un obstáculo para un posible acuerdo.

Otro de los primeros desafíos del gobierno era aumentar los precios de exportación para sus mercados existentes. En junio de 2006, negoció exitosamente un incremento del 48% al precio del gas exportado a Argentina, que ingresará anualmente 110 millones de dólares adicionales a las arcas gubernamentales.<sup>116</sup> Después de intensas y prolongadas negociaciones con Petrobras que terminaron en febrero de 2007, el gobierno no pudo lograr aumentar significativamente el precio de exportación del gas a Brasil bajo el contrato existente, el cual termina en 2019.

En este tema, nuevamente, algunos movimientos sociales y analistas políticos critican a Morales que centre su atención en la exportación del gas como materia prima, un modelo de desarrollo que ha fallado en el país por siglos. Al priorizar la exportación del gas como materia prima, argumentan, puede hacerse a costa del relegamiento del servicio al mercado interno del país, del desarrollo

de la industria doméstica y de mayores ingresos disponibles por la producción de productos con valor agregado. Este asunto llegó a ser muy sensible para el pueblo boliviano a mediados de 2007, cuando los combustibles para el consumo escaseaban y hubo la necesidad de importar gas de Venezuela.

### *Industrializando el gas boliviano*

El gobierno de Morales ha anunciado ambiciosos planes de industrialización del gas boliviano a través de la construcción de plantas de separación y procesamiento de gas, afirmando que los días de la exportación de materia prima en Bolivia han terminado. Estas inversiones permitirían que la producción de productos con valor agregado incluyendo la electricidad, el diesel sintético, plásticos y fertilizantes generen mayores ingresos.

Muchos de los entusiastas inversionistas que esperan conseguir un nicho en el mercado del gas boliviano no son los predecibles jugadores de Occidente. Gazprom, el gigante energético ruso, ha expresado su interés en invertir más de 2 000 millones de dólares en Bolivia, así como también los requerimientos han procedido de potencias asiáticas como India y China.<sup>117</sup> En diciembre de 2006, Evo Morales y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inauguraron el primer proyecto boliviano de Petroandina, una empresa conjunta formada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e YPF. Petroandina está abriendo nuevas gasolineras y estaciones de servicios en Bolivia y tiene planes para la construcción de dos plantas de separación de gas, las cuales proveerán combustibles para uso doméstico y también para la exportación a Paraguay, Argentina y Chile. La compañía también tiene planes para invertir en exploración y explotación hidrocarburífera.<sup>118</sup>

Poder asegurar nuevas inversiones, sin embargo, es sólo parte de la solución para lograr la industrialización deseada. La posibilidad de que Bolivia rompa con su tradición histórica de ser exportador de materias primas depende de la fuerza y los recursos que YPF tenga para guiar esa industrialización. Las compañías multinacionales maximizan sus ganancias en países como Bolivia, extrayendo materia prima a los más bajos precios posibles y no al construir plantas procesadoras o mejorar los servicios para el consumo interno nacional. Este tipo de arreglos puede ser altamente lucrativo para compañías como Repsol, pero no ha sido bueno para Bolivia. YPF necesitará ser lo suficientemente fuerte económica y políticamente para cambiar esa ecuación. Sin embargo, existe preocupación de que el gobierno de nueva cuenta no esté priorizando suficientemente las inversiones para un programa de industrialización dirigido por YPF.

### **El camino pedregoso de Morales**

El gobierno de Morales ha encontrado redes de obstáculos políticos e institucionales en su propósito de aplicar una reforma en la industria de hidrocarburos.

Poco después del anuncio del decreto de mayo de 2006, YPFB comunicó que no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad de la distribución de combustible como lo mandaba el decreto. En el mes de agosto el gobierno declaró que el proceso de nacionalización estaba temporalmente suspendido debido a la “falta de recursos económicos.”<sup>119</sup> Ese mismo mes, el presidente de YPFB, Jorge Alvarado, renunció acusado de haber firmado un contrato de diesel que violaba el decreto de nacionalización. Todo esto creó más inquietud y exacerbó las preocupaciones de los críticos, de que a YPFB le falta capacidad, competencia y solvencia para llevar adelante su nuevo papel.

También en agosto de 2006 la policía boliviana y los fiscales buscaron a los funcionarios de la más grande inversionista extranjera de hidrocarburos en Latinoamérica, la española Repsol. El contacto se realizó después de que se emitiera una orden de detención en febrero para los dos ejecutivos principales de Repsol en Bolivia, como parte de investigaciones de contrabando y de actos ilícitos.<sup>120</sup> La compañía expresó indignación, advirtiendo que las investigaciones estaban poniendo en peligro la continuidad de sus inversiones en Bolivia. En esta instancia, así como en otras, el gobierno generalmente desarrolla una difícil estrategia de ser simultáneamente el ‘bueno’ y el ‘malo’ con las compañías energéticas extranjeras: negociando para mantener una continua inversión mientras ejerce una retórica impetuosa que expone la conducta incorrecta de las corporaciones, aunque siempre sin llegar al punto de cancelar cualquier contrato.

El gobierno de Morales también ha enfrentado una rígida oposición en el Congreso boliviano, generalmente de los miembros de los partidos conservadores de las tierras bajas ricas en hidrocarburos, en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, quienes tratan de obtener un mayor control local sobre la renta hidrocarbúfera. En el departamento de Tarija, los funcionarios de la Prefectura están buscando realizar sus propios acuerdos con las compañías extranjeras, esperando que el proceso de reciente descentralización y el movimiento de autonomía promovido por los departamentos del occidente boliviano establezcan claramente tales derechos.<sup>121</sup> Los críticos a estas posiciones, sin embargo, destacan que Santa Cruz y Tarija ya recibieron una porción mayor y desproporcionada de los ingresos petroleros y gasíferos debido a su calidad de departamentos productores.

Además de la imposibilidad gubernamental de recuperar el control de las compañías capitalizadas, el desabastecimiento de combustible para el mercado nacional trajo más cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno. El presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, reveló la falta de experiencia del gobierno. Reflexionando sobre las negociaciones con las firmas extranjeras, Morales Olivera dijo: “En una lado de la mesa de negociación se sentaban profesionales con 30 años de experiencia [en el campo energético] y a nuestro lado, gente de tan sólo 30 años de edad.”<sup>122</sup>

En sólo un año, la administración de Evo Morales experimentó una excesiva rotación de personal clave en su equipo que trata el tema de los hidrocarburos,

incluyendo uno de sus ministros, dos superintendentes de la agencia reguladora de la industria hidrocarburífera y tres presidentes de YPF. Esta constante inestabilidad ha generado continuas preocupaciones sobre la capacidad operacional de la empresa estatal y de la habilidad del gobierno para completar el proceso de nacionalización.

## VII. Transformando el gas en desarrollo

A lo largo de su historia, Bolivia no ha podido traducir su abundante riqueza de recursos naturales en mejores condiciones de vida para su pueblo. “El resultado final,” explicó Carlos Villegas, “es lo que se ve: un país con mucha miseria... desigualdad, concentración de riqueza y mucha exclusión.”<sup>123</sup> Bolivia no está sola. Países de todo el mundo han luchado, y con frecuencia han fallado en la difícil tarea de apalancar los recursos naturales para aumentar su desarrollo socioeconómico. Casi siempre, los países ricos en recursos naturales viven en un desolador subdesarrollo, víctimas de un desconcertante fenómeno que los economistas llaman “la maldición de los recursos.”

### La maldición de los recursos

*“Considerándolo todo, ojalá hubiéramos descubierto agua.”<sup>124</sup>*

Sheik Ahmed Yamani, ministro de Petróleo de Arabia Saudí (1962-1986)

“Si no hubiéramos descubierto petróleo, hoy habríamos estado mejor,” lamentó un ex ministro de Finanzas de Nigeria.<sup>125</sup> Desde que empezó la producción de petróleo hace más de 40 años, más de 340 000 millones de dólares de petróleo pasaron a través del tesoro gubernamental de Nigeria mientras el estándar de vida ha bajado precipitosamente. Hoy en día, 70% de los nigerianos vive con menos de un dólar al día.<sup>126</sup> Muchos de los residentes del rico delta nigeriano viven en la inmundicia, algunos a pocos metros de los pozos petroleros que contaminan el aire y el agua para beber del lugar. Personal militar patrulla el área para proteger los intereses de las compañías petroleras extranjeras, constriñendo a muchas comunidades a casi un estado de sitio.<sup>127</sup>

Las lecciones aprendidas de mediados de siglo pasado sobre el desarrollo de los recursos naturales son serias: países dotados con abundancia de petróleo y gas no han experimentado una mejora en sus estándares de vida y un alza de sus ingresos, pero paradójicamente han sufrido altos niveles de pobreza y desigualdad, debilidad en gobernar, corrupción, daño al medio ambiente y disturbios políticos.<sup>128</sup> La curiosa paradoja de la maldición de los recursos es mayormente de naturaleza política.

Debido a que los recursos naturales son potencialmente un negocio muy lucrativo, tienen la capacidad de manipular y corromper los procesos políticos.



Frecuentemente los gobiernos sucumben a las presiones y aceptan relaciones contractuales no transparentes, renunciando al control sobre el desarrollo de los recursos estatales y generalmente sobre una distribución justa de los ingresos. En este clima lo más probable es que los líderes estén dispuestos a hacer la vista gorda a los impactos negativos al medioambiente y a la sociedad provocados por la extracción y producción de los recursos. Los ingresos son también mal administrados cuando los gobiernos súbitamente se ven inundados de dinero del petróleo y el gas y, convirtiéndose en la miel deseada, se encuentran con facciones políticas u otras partes interesadas que compiten para convencer a los funcionarios gubernamentales que canalicen los fondos en su dirección.<sup>129</sup>

Otra razón para la maldición de los recursos es que la excesiva dependencia de un solo recurso o industria causa inestabilidad económica y obstaculiza un desarrollo más amplio. Incluso si un país logra aumentar cuantiosamente sus ingresos, esa afluencia puede tender a que los gobiernos se vuelvan displicentes y se nieguen a encarar la difícil tarea de la planificación a largo plazo. La fuerte dependencia de un país de sus recursos naturales también puede dejarlo vulnerable a las volátiles oscilaciones de los precios internacionales. Además de ello, el desarrollo de un recurso natural provee muy limitados empleos a la población de los países receptores.<sup>130</sup>

“Los recursos naturales no renovables son el pan de hoy y el hambre de mañana,” declaró el intelectual boliviano y arquitecto de la nacionalización en 1969 de la Gulf Oil Company en Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz.<sup>131</sup> Los recursos naturales están empezando a escasear, los precios están aumentando, y si un país no es capaz de captar e invertir sabiamente su riqueza de recursos para beneficiar a las futuras generaciones, puede que sea más ventajoso dejarlos simplemente en la tierra.

Si es que Bolivia logra o no convertir sus riquezas hidrocarburíferas, debe antes atender una serie de cuestiones políticas. ¿Puede elaborar y aplicar estrategias efectivas para invertir los ingresos de los hidrocarburos en crear oportunidades y empleo? ¿Puede construir instituciones fuertes que desarraiguen la corrupción y regulen la industria de los hidrocarburos? ¿Puede mitigar los impactos sociales y medioambientales del desarrollo energético? Y ¿puede pensar a largo plazo y diversificar su economía sabiendo que un día esos recursos subterráneos se habrán ido?

### **Invertiendo nuevos ingresos y construyendo instituciones fuertes**

El crecimiento de la industria de hidrocarburos de Bolivia no generará empleos o mejoras en el bienestar público por sí mismo. La tarea más crítica para Bolivia es determinar la manera más efectiva de gastar los nuevos ingresos. Algunos abogan por que la renta sea distribuida directamente a los ciudadanos, tal como sucede en Alaska, EE.UU., pero en un país donde existe una falta crónica de recursos públicos básicos como agua potable o escuelas, la inversión pública es una urgente y obvia

prioridad. Bolivia tiene muchas opciones. Podría usar los ingresos para mejorar los débiles servicios sociales públicos, lo cual se ha empezado a hacer a través de la expansión del sistema de salud pública. El gobierno podría también dar prioridad a trabajos públicos tales como la construcción de carreteras o proyectos sanitarios, que tienen la capacidad de crear empleo inmediato. Otras opciones para invertir son canalizar los ingresos a programas de microcrédito a pequeñas empresas o a la asistencia agrícola que podría impulsar el desarrollo local. El desafío está en balancear las necesidades económicas y sociales inmediatas con inversiones que provean resultados de desarrollo más profundos a largo plazo.

Hasta ahora, el uso más conocido de los nuevos ingresos de los hidrocarburos ha sido un modesto bono anual distribuido a un millón de estudiantes de las escuelas primarias públicas. La intención declarada del programa es mantener a la niñez de bajos recursos en las escuelas, que generalmente no puedan permitirse comprar libros, uniformes y otras cosas necesarias para su estudio. Los proponentes del programa elogian la distribución directa de fondos a las niñas y a los niños como el medio más eficiente que la distribución a través de la burocracia, que muchas veces es propensa a la corrupción. Otros, sin embargo, se preocupan de que esos fondos puedan fácilmente ser mal utilizados por los padres, y consideran que el programa es una táctica política para fortalecer la base popular de Morales.

Desde la aprobación de la ley hidrocarburos de 2005, muchos de los ingresos fueron canalizados a los gobiernos municipales y regionales en vez de al gobierno central. Con frecuencia, las autoridades locales no han sabido dar un buen uso a aquellos recursos. Mientras los ingresos de hidrocarburos se acumulan en las arcas de los gobiernos municipales y regionales, la administración de Morales está trabajando sobre una legislación para cambiar la distribución de los ingresos hidrocarburíferos.

Si Bolivia logra utilizar los ingresos de los hidrocarburos para impulsar su desarrollo, debe tener como prioridad asegurar la transparencia y construir una eficaz capacidad reguladora. El profesor Robert Conrad, de la Universidad de Duke, está preocupado porque en las nacionalizaciones de varias empresas estatales de hidrocarburos en otros países les ha faltado transparencia. Advierte que “pueden aumentar los incentivos para la corrupción.”<sup>132</sup> Romper este ciclo de corrupción significa construir un organismo regulador fuerte e independiente capaz de monitorear efectivamente las transacciones financieras.

Como parte de ese esfuerzo, el gobierno ha aumentado la transparencia en los contratos de los hidrocarburos, que durante los años de la capitalización se mantuvieron en secreto. El premio Nobel, economista y ex jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, dijo:

Sin transparencia, es fácil que los ciudadanos sientan que han sido engañados... y con frecuencia lo son. Cuando las compañías extranjeras consiguen un acuerdo que es muy bueno para ser verdad, frecuentemente hay algo escondido que sucede debajo la manga.<sup>133</sup>

En Bolivia todavía se sigue hablado poco de los mecanismos que aseguran que la sociedad civil tenga un importante papel en la supervisión de YPFB, y cómo son gastados los ingresos de los hidrocarburos.

### **Mitigando los impactos sociales y medioambientales**

Otro desafío crucial para Bolivia es mitigar la degradación del medio ambiente que acompaña a la extracción de gas y petróleo, a su transportación e industrialización. Bolivia es reconocida entre los diez países del mundo con mayor biodiversidad, y el desarrollo de los hidrocarburos está localizado en algunas de las áreas naturales más sensibles del país.<sup>134</sup>

Los proyectos de industrialización tales como la refinación, la producción de plásticos o de fertilizantes traen con ellos procesos químicos que si no se manejan correctamente tienen impactos sumamente negativos en el medioambiente y en la salud de las comunidades cercanas. Para manejar estos impactos, Bolivia debe mejorar enormemente sus leyes medioambientales y las regulaciones sobre las operaciones hidrocarburíferas, incluyendo evaluaciones de impacto medioambiental, estricta supervisión de los proyectos en curso y una fiscalización eficaz.

Otro desafío para Bolivia será asegurar una justa y adecuada relación con las comunidades indígenas que viven en las áreas de explotación de hidrocarburos. Históricamente, en Bolivia y el mundo, estas comunidades en su mayoría extremadamente pobres nunca se han beneficiado de los recursos extraídos de sus tierras y han tenido que soportar el considerable impacto negativo sobre sus propias comunidades y el medioambiente producido por la extracción y la explotación de hidrocarburos. Los mecanismos que permiten consultar a las comunidades nativas antes de iniciar la explotación de los hidrocarburos y compensarlas por daños causados, han sido gravemente incongruentes. En 2005 existía un borrador del MAS sobre la ley de hidrocarburos que establecía el derecho de las comunidades indígenas a vetar decisiones sobre el desarrollo de los hidrocarburos en sus territorios, pero fue eliminado de la versión final del proyecto de ley. Ese mecanismo de veto tampoco fue incluido en el decreto de nacionalización de Morales, de 2006.

Guadalupe Montenegro, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), con sede en Santa Cruz, explicó que en el pasado muchas comunidades aisladas negociaron por sí mismas con las adineradas compañías, sin apoyo del gobierno boliviano:

Quando [la gente] pide la nacionalización o control del Estado, quiere también que el Estado asuma su rol de defensor de la sociedad. El Estado tiene que tener la información y las instituciones capacitadas, y los expertos en esto... Ellos deberían estar al medio de la relación entre las empresas y las comunidades.<sup>135</sup>

Las comunidades afectadas deben estar más involucradas en cómo se determinan las políticas a todo nivel; desde decisiones sobre explotación hasta de cómo utilizar las ganancias.

### **Diversificando la economía**

Como la renta de los hidrocarburos significó aproximadamente 50% de todos los ingresos de las exportaciones de Bolivia en 2005 y 2006, el gobierno tiene un largo camino que andar para dejar de ser dependiente en este único sector, una dependencia que deja la economía vulnerable a las oscilaciones del mercado internacional y al consiguiente agotamiento de sus recursos no renovables.<sup>136</sup> La renta de estos recursos de Bolivia podría ser utilizada para activar el desarrollo de recursos de energía renovable tales como la eólica, ayudada por sus fuertes vientos, la solar, por su alta exposición al sol, y aprovechar su potencial geotérmico, o también desarrollar otros sectores tales como la agricultura, la industria manufacturera y los servicios.

Carlos Villegas, cuando era ministro de Planificación y Desarrollo en el gobierno de Morales, dijo que los fondos públicos deberían ser invertidos en programas rurales y urbanos dirigidos a ayudar a las “micro, pequeñas y medianas empresas,” parte de un plan económico con el cual se intenta crear 100 000 puestos de trabajo al año por los próximos cinco años.<sup>137</sup> Desde el punto de vista de Villegas, la razón por la que Bolivia continúa siendo uno de los países más empobrecidos de Sudamérica, se debe a la exclusión del pequeño sector privado y al favoritismo por las empresas extranjeras:

[El pequeño sector empresarial] ha sido excluido durante los últimos 22 años de desregulaciones y políticas económicas liberales... [Pero] lo que estamos haciendo ahora es invitar a las empresas bolivianas a participar en los servicios y procesos relacionados a la industrialización del gas natural...<sup>138</sup>

Los recursos del gas boliviano se habrán agotado algún día. Para prepararse para ese día, Bolivia necesita reinvertir en los siguientes años las ganancias de sus recursos naturales en otras industrias y proyectos que se traduzcan en una mejor calidad de vida para las generaciones futuras.

## **VIII. Conclusiones**

En mayo de 2006, cuando el presidente Evo Morales anunció su decreto de nacionalización, prometió utilizar las abundantes reservas de gas boliviano para acabar con la pobreza crónica del país. Por todo el mundo, sin embargo, la historia ha mostrado repetidas veces que el poseer ricos y abundantes recursos naturales no trae por sí solo el desarrollo. Para revertir la suerte de Bolivia se

requerirá un conjunto de estrategias económicas y profundos cambios políticos e institucionales. Pero si el gas no llegara a ser el combustible que encienda una transformación económica en Bolivia, podría ser una chispa crucial que provea recursos financieros suficientes para realizar otros cambios políticos y económicos posibles. Para que Bolivia modifique fundamentalmente su industria hidrocarburífera, el gobierno necesita tres cosas que actualmente le hacen falta: una visión a largo plazo, el capital para financiarla, y la capacidad para llevarla a cabo.

Primero y en primer lugar, el gobierno necesita tener una visión coherente a largo plazo —que vaya más allá de la administración de Morales— de cómo será administrado el sector hidrocarburífero; cómo se industrializará el gas en bruto y se utilizará para desarrollar otras industrias, cómo Bolivia usará esos recursos para satisfacer la demanda nacional, y cómo serán invertidos los ingresos finitos para proveer futuros recursos. Esta visión, a su vez, necesitará ser desarrollada y apoyada a largo plazo por un amplio consenso entre el pueblo boliviano.

Segundo, para reconstruir la industria hidrocarburífera del Estado y desarrollar la capacidad interna para lograr la industrialización nacional, Bolivia necesita capital de inversión. Parte de este capital podría provenir de nuevas inversiones o acuerdos de desarrollo con inversores o instituciones crediticias. Si es así, las inversiones necesitan llegar bajo términos que garanticen al Estado el control, la planificación y la regulación del sector, para evitar la repetición de los errores del pasado. El capital de inversión podría también provenir de los crecientes ingresos con los que Bolivia cuenta por la venta de gas. Pero eso requerirá decisiones políticas difíciles y de un cuidadoso equilibrio entre los objetivos de desarrollo a largo plazo y las necesidades de gastos públicos a corto plazo.

Quizás el mayor desafío de Bolivia será desarrollar los recursos humanos necesarios y la capacidad técnica suficiente para hacer funcionar la industria estatal, negociar con actores extranjeros y regular las inversiones privadas. La falta de capacidad de Bolivia se ha convertido en el cuello de botella para lograr verdaderos cambios y ha causado problemas significativos en la aplicación de la política en curso. A largo plazo, Bolivia debe prestar atención a cómo su propio sistema de educación puede empezar a entrenar a ingenieros petroleros y medioambientales, químicos, abogados, analistas de industrias y auditores de impuestos que el país necesitará tener. A corto plazo, Bolivia deberá encontrar y, en muchos casos, pagar a expertos extranjeros.

Para los bolivianos, el legado de la riqueza de sus recursos naturales que desaparece debajo de sus pies es indeleble. Hace unos cinco siglos, los conquistadores vestidos con armaduras y montados a caballo, vaciaron Bolivia de uno de los más grandes depósitos de minerales que la historia haya conocido. En las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, los conquistadores modernos de traje y corbata predicaron una teoría de que las empresas privadas, por sí mismas, son las más calificadas para desarrollar los recursos naturales del país.

Pero la más reciente experiencia de Bolivia podría haber sido muy diferente. ¿Cómo estaría Bolivia económicamente situada ahora si hubiera seguido el ejemplo de su país vecino, Chile, que irónicamente es mencionado como el ejemplo exitoso latinoamericano del neoliberalismo, y hubiera excluido a los hidrocarburos de las reformas de la capitalización, como Chile lo hizo con su sector estatal minero? ¿Qué habría pasado si Bolivia hubiera privatizado la empresa petrolera estatal, pero hubiera mantenido el rol fiscalizador del gobierno y los preexistentes niveles de impuestos y regalías? Bolivia tenía un abanico de opciones para reformar su economía, y en la mayoría de los casos, bajo clara presión extranjera, escogió la más extrema y eligió mal.

Políticamente hablando, la propuesta del presidente Morales está claramente ubicada a medio camino; escoge reformar en vez de escribir de nuevo el existente conjunto de reglas. Una parte de esa política propone otorgar al Estado un directo y preponderante papel en cómo los hidrocarburos son desarrollados, pero la magnitud de ese papel es una interrogante abierta. El riesgo está en que al limitar el papel de YPFB se atrofie el potencial de la empresa desde el principio, dejándola imposibilitada de crecer, a la sombra de muchas otras poderosas compañías privadas extranjeras, y una vez más fracase en tomar ventaja de todo el potencial que Bolivia tiene.

Las compañías extranjeras y las instituciones financieras internacionales que las apoyan resistieron ferozmente los nuevos cambios en las leyes de hidrocarburos de Bolivia. Es esencial destacar, sin embargo, que la propuesta económica defendida por las compañías extranjeras, las instituciones crediticias internacionales y una cadena de gobiernos conservadores, sólo dejaron a Bolivia atascada en déficit e imposibilitada de levantarse de su pobreza crónica. Fue sólo la presión de los movimientos sociales del país y de la izquierda –antes y después de que Morales asumiera el poder– que condujo a políticas que han hecho aumentar los ingresos gubernamentales y han contribuido a tener el primer superávit fiscal después de 30 años. Los nuevos contratos firmados en octubre de 2006, que triplicaron los impuestos de las compañías, demostraron que había un alto grado de falsa alarma en las advertencias conservadoras sobre el cambio.

Después de dos décadas de fallidas teorías, el péndulo de la lucha global por la supremacía del Estado o el mercado está moviéndose hacia el Estado y alejándose del mercado privado, especialmente en lo referente a los hidrocarburos, ya que 80% de las reservas mundiales están actualmente bajo control del sector público.<sup>139</sup> El gobierno de Morales ha expresado que revertir 20 años de políticas económicas neoliberales en Bolivia no va a pasar de la noche a la mañana, y esa evaluación es correcta. Una empresa estatal de hidrocarburos reducida a sólo “sellar contratos” con las compañías extranjeras, tomará años en ser reconstruida.

Evo Morales ha hecho grandes promesas de que el gas traerá cambios para los nueve millones de habitantes de Bolivia, y el pueblo ha demostrado que lo hará

responsable si no cumple esas promesas. La esperanza de Bolivia es que el verdadero combustible para el cambio no es el gas ni el gobierno, sino el pueblo mismo.

En palabras de Néstor Salinas, que perdió a su hermano en la Guerra del Gas de 2003, “los gobiernos vienen y van, pero la memoria de la gente permanece.”<sup>140</sup>



## Notas

- 1 Mensaje a la Nación del presidente de la República, Evo Morales Ayma, desde Carapari, La Paz, 1 de mayo, 2006.
- 2 Andrés Solíz Rada, ministro de Hidrocarburos de Bolivia, en su carta de renuncia, 15 de septiembre, 2006, traducción del texto encontrado en: <http://mrzine.monthlyreview.org/so-lizrada190906.html>.
- 3 James Dunkerley, *Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia 1952-82* (Rebelión en las venas: la lucha política en Bolivia, 1952-82. Plural editores, 2003) Thetford, Gran Bretaña: Thetford Press, 1984: p. 6.
- 4 Ibid, p. 7.
- 5 Ibid, p. 14.
- 6 Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), “*La gestión de los recursos naturales no renovables de Bolivia, No. 2*,” Cochabamba: Live Graphics SRL, 2005: p. 97; John Crabtree, *The Great Tin Crash* (La gran depresión del estaño) Londres: Latin America Bureau, 1987.
- 7 Mirko Orgaz García, *La Guerra del Gas: Nación versus Estado transnacional*, La Paz, CEDLA, 2005: p. 139.
- 8 Paul Roberts, *The End of Oil: On the Edge of a Perilous New World* (El fin del petróleo: al borde de un peligroso mundo nuevo), Nueva York: Houghton Mifflin Company, 2004: p. 168.
- 9 Ibid, p. 167.
- 10 Energy Information Administration (Información de la Administración de Energía), “December 2006 Monthly Energy Review: Table 9.11 Natural Gas Prices,” (“Diciembre 2006: Reseña de Energía Mensual: Tabla 9.11 Precios del gas natural”): [http://tonto.eia.doe.gov/merquery/mer\\_data.asp?table=T09.1](http://tonto.eia.doe.gov/merquery/mer_data.asp?table=T09.1); Roberts, *El fin del petróleo*, p. 177.
- 11 “Más de 57 000 vehículos dejaron la gasolina por el gas natural,” *Opinión*, 1 de septiembre, 2006.
- 12 Ibid.
- 13 Saúl J. Escalera, presentación en *PowerPoint: Industrialización del gas natural boliviano*, Universidad Mayor de San Simón, Escuela Universitaria de Postgrado, julio, 2002.
- 14 Carlos Rojas, entrevista con los autores, La Paz, 28 de marzo, 2006.
- 15 Carlos Royuela Camboni, *Cien años de hidrocarburos en Bolivia: 1896-1996*, Cochabamba: Los amigos del libro, 1996: pp. 35-36; Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), *Los hidrocarburos en la historia de Bolivia*, La Paz: CEDLA, 2005: p. 8.

- 16 Enrique Mariaca Bilbao, "Petróleo en Bolivia," *Temas Sociales 22 Foro YPF vs. Capitalización*, La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Sociales, 2001: p.19; Dunkerley, *Rebellion*, p. 27.
- 17 "Standard Oil: La primera nacionalización en 1937," *Opinión*, 23 mayo, 2006.
- 18 Mariaca, *Temas*, p. 19.
- 19 Mirko Orgaz, *La nacionalización del gas: Economía, política y geopolítica de la 3ra. nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia*, La Paz: CEDLA, 2005: p. 100.
- 20 CEDLA, *Los hidrocarburos*, p. 8.
- 21 Orgaz, *La nacionalización*, p. 108.
- 22 Ibid, p. 107.
- 23 Herbert S. Klein, *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society (Bolivia: La evolución de una sociedad multiétnica)*, 2nd Edition, Nueva York: Oxford University Press, 1992: p. 240.
- 24 Estadísticas de ayuda extraídas de 1954-1964. Mariaca, *Temas*, p. 22.
- 25 CEDLA, *Los hidrocarburos*, p. 16; Dunkerley, *Rebellion*, p. 112.
- 26 CEDLA, *Los hidrocarburos*, p. 15.
- 27 Orgaz, *La nacionalización*, p. 111.
- 28 CEDLA, *Los hidrocarburos*, p. 15.
- 29 Royuela, *Cien años*, p. 123.
- 30 Augusto Céspedes, *Antientreguismo: Una política del pueblo, Foro Nacional: Gas y petróleo, liberación o dependencia*, Cochabamba: UMSS Editorial Universitaria, 29 de noviembre, 1967: p. 132.
- 31 Royuela, *Cien años*, p. 141.
- 32 Marcelo Quiroga Santa Cruz, *Oleocracia o patria: Obras completas, Volumen 5*, La Paz: Plural editores, 1977: p. 62.
- 33 Dunkerley, *Rebellion*, p. 165.
- 34 "1969: Marcelo Quiroga y El Decreto de Nacionalización de la Gulf Oil," *Opinión*, 14 de mayo, 2006.
- 35 CEDLA, *Los hidrocarburos*, pp. 17-18.
- 36 Benjamin Kohl y Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance (El bumerán boliviano: hegemonía neoliberal y resistencia social: Plural editores, La Paz, marzo, 2007)*, Nueva York: Zed Books, 2006: p. 112.
- 37 Royuela, *Cien años*, p. 151.
- 38 J. Osvaldo Calle Quiñónez, *El que manda aquí soy yo: Guía rápida para entender la capitalización*, La Paz: Fundación Chuquiagu, 2000: p. 141; Pablo Ramos Sánchez, "Los recursos hidrocarbúricos en la economía boliviana," *Temas Sociales 22 Foro YPF vs Capitalización*, La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Sociales, 2001: p. 87.
- 39 Mariaca Bilbao, "Petróleo en Bolivia," p. 27.
- 40 Álvaro García Linera, "Los impactos de la capitalización: Evaluación a medio término," *Luces y sombras: 10 años de la capitalización, Delegación Presidencial para la revisión y mejora de la capitalización*, La Paz: diciembre, 2004: p. 227.
- 41 Carlos Villegas Quiroga, entrevista con Gretchen Gordon, La Paz, junio, 2005.
- 42 Roberto Fernández Terán, *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial: Poder supranacional en Bolivia*, La Paz: Universidad Mayor de San Simón, julio, 2004: p. 86.
- 43 J. Osvaldo Calle Quiñónez, *El que manda aquí soy yo: Guía rápida para entender la capitalización*, La Paz: Fundación Chuquiagu, 2000: p. 29.
- 44 Osvaldo Calle Quiñónez, "Bolivia la Nueva: El despertar de un acto de ilusión," *Temas Sociales 22 Foro YPF versus capitalización*, La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Sociales, 2001: p. 48.
- 45 Orgaz, *La nacionalización*, p. 136.
- 46 Ibid.
- 47 Mirko Orgaz, entrevista con los autores, 27 de marzo, 2006.



- 48 Claire McGuigan, "The Benefits of Foreign Investment: Is Foreign Investment in Bolivia's Oil and Gas Delivering?" ("Los beneficios de la inversión extranjera: ¿Se rinde la inversión extranjera de petróleo y gas de Bolivia?") *Christian Aid/CEDLA*, noviembre 2006: pp. 37, 41.
- 49 Carlos Arce, entrevista con los autores, La Paz, 27 de marzo, 2006.
- 50 García Linera, "Los impactos de la capitalización," p. 227.
- 51 Orgaz, *La nacionalización*, p. 137.
- 52 Orgaz, *La Guerra del Gas*, p. 223.
- 53 García Linera, "Los impactos de la capitalización," p. 235; *CIA World Factbook*, 2005; Fondo Monetario Internacional, "Bolivia: Ex Post Assessment of Longer-Term Program Engagement—Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion," 2005, p. 6.
- 54 García Linera, "Los impactos de la capitalización," p. 232.
- 55 Ministerio de Hidrocarburos, "Estadísticas— Upstream— Producción," 28 de julio, 2005; "Comportamiento de los impuestos sobre hidrocarburos," datos no publicados de CEDLA, La Paz, 19 de marzo, 2007. (Promedio calculado por los autores).
- 56 Óscar Zegada Claure, "Los impactos de la capitalización: Evaluación a medio término," *Luces y Sombras: 10 años de la capitalización*, Delegación Presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, La Paz: diciembre, 2004: p. 222; García Linera, "Los impactos de la capitalización," p. 230.
- 57 "La Fiscalía de La Paz cierra el caso de la quebrada empresa Enron, *La Razón*, 21 de diciembre, 2006; J. Osvaldo Calle Quiñónez, *El que manda aquí soy yo: Guía rápida para entender la capitalización*, La Paz: Fundación Chuquiagu, 2000: p. 135.
- 58 "Denuncian un gasoducto de uso privado," *Opinión*, 15 de noviembre, 2002.
- 59 Enrique Menacho Roca, entrevista con los autores, La Paz, 25 de abril, 2006.
- 60 Orgaz, *La Guerra del Gas*, 193-194.
- 61 Luis A. Gómez, *El Alto de pie: Una insurrección aymara en Bolivia*, La Paz: Textos Rebeldes, 2004: p. 41.
- 62 Orgaz, *La Guerra del Gas*, p. 194.
- 63 *Gas: Debate Nacional*, La Paz: El pulso del país, 2004: p. 96.
- 64 "Marchas pacíficas por gas paralizan varias ciudades," *Los Tiempos*, 20 de septiembre, 2003.
- 65 Gómez, *El Alto de pie*, p. 22.
- 66 *Memoria Testimonial de la 'Guerra del Gas'*, Cepas-Caritas, 2004: p. 30.
- 67 Decreto Supremo 27209, 11 de octubre, 2003.
- 68 Néstor Salinas Malléa, entrevista con Gretchen Gordon, Mar del Plata, Argentina, noviembre, 2005.
- 69 Néstor Salinas Malléa, entrevista por correo electrónico con los autores, mayo, 2007.
- 70 "Mesa ratifica su alejamiento de Goni y asegura que nada justifica la muerte," *Opinión*, 17 de octubre, 2003.
- 71 Gómez, *El Alto de pie*, p. 99.
- 72 *Ibid*, p. 104.
- 73 "Una cronología de la caída del ex presidente," *Correo del Sur*, 18 de octubre, 2003.
- 74 "EE.UU. apoya a Goni y dice que no reconocerá otro gobierno," *La Razón*, 14 de octubre, 2003.
- 75 Forrest Hylton y Sinclair Thomson, "The Chequered Rainbow" ("El arco iris a cuadros") *New Left Review* #35, septiembre-octubre 2005: p. 56.
- 76 *Ibid*, p. 57.
- 77 Sesenta de las 67 muertes fueron causadas por acciones relacionadas a acciones militares, según la certificación ofrecida, según el archivo legal del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades.
- 78 Discurso de posesión del presidente constitucional Carlos Mesa Gisbert. La Paz, 17 de octubre de 2003: [http://www.bolivia-usa.org/discurso\\_presidente\\_mesa.htm](http://www.bolivia-usa.org/discurso_presidente_mesa.htm).

- 79 Archivo legal de Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, La Paz.
- 80 Néstor Salinas Malléa, entrevista por correo electrónico con los autores, mayo, 2007.
- 81 Ibid.
- 82 “Mesa mantiene alto nivel de apoyo mientras Evo Morales cae a sólo 8%,” *La Capital*, 21 de marzo, 2005.
- 83 Carlos Villegas Quiroga, entrevista con Gretchen Gordon, La Paz, junio 2005.
- 84 “Documentos de Coyuntura” Volumen 9, La Paz: CEDLA, diciembre, 2004: p. 21.
- 85 Hylton and Thomson, “The Chequered Rainbow,” p. 58.
- 86 “FMI: Bolivia solo es viable si exporta gas,” *Econoticias Bolivia*, 11 de marzo, 2004.
- 87 Ver: [www.bolivia/especiales/2004/referendum/resultados](http://www.bolivia/especiales/2004/referendum/resultados), citando a la Corte Nacional Electoral.
- 88 Comisión Andina de Juristas y Red Andina Democrática, Alerta Informativa Democrática, “Últimos acontecimientos en Bolivia,” abril-mayo, 2005: [http://www.cajpe.org.pe/Nuevoddhh/alerta\\_informativa\\_democr%C3%A1tica-Bolivia.pdf](http://www.cajpe.org.pe/Nuevoddhh/alerta_informativa_democr%C3%A1tica-Bolivia.pdf)
- 89 Ibid.
- 90 Carlos Arce y Pablo Póveda, “*La nueva Ley de Hidrocarburos*,” La Paz: CEDLA, mayo, 2005: p. 5.
- 91 “Senador adelanta que Mesa promulgará la ley mañana,” *Los Tiempos*, 7 de mayo, 2005.
- 92 Carlos Rojas, entrevista con los autores, La Paz, 28 de marzo, 2006.
- 93 “Congreso e Iglesia definen futuro del país,” *Los Tiempos*, 7 de junio, 2005.
- 94 Hylton and Thomson, “The Chequered Rainbow,” 60.
- 95 Ibid.
- 96 Ibid.
- 97 “Propuesta para una nueva Bolivia con progreso y paz: Programa de Gobierno 2006-2010,” Podemos, 2005. Panfleto de las elecciones, p. 19.
- 98 “Nacionalización con compra progresiva,” *La Razón*, 24 de octubre, 2005.
- 99 Movimiento al Socialismo (MAS), “Ayuda memoria: Diez medidas para cambiar Bolivia,” Documento del MAS para las elecciones de 2005.
- 100 Discurso de Evo Morales Aima al Congreso boliviano, La Paz, 22 de enero, 2006.
- 101 “Bush advierte la ‘Erosión de la democracia’ en Venezuela, Bolivia,” *Bloomberg*, 22 de mayo, 2006.
- 102 “El presidente asumió el cargo con el 74% de aprobación,” *La Razón*, 22 de enero, 2007.
- 103 “Bolivia: petroleras firman acuerdo,” *BBC Mundo.com*, 29 de octubre, 2006; “Presidente Evo Morales: ‘De aquí a 10 años, Bolivia ya no será ese país mendigo,’” United Press Internacional, 31 de octubre, 2006.
- 104 Roberto Fernández Terán, entrevista con los autores, Cochabamba, 21 de marzo, 2006.
- 105 “El Gobierno inició la industrialización del gas,” *El Deber*, 11 de diciembre, 2006.
- 106 Juan Patricio Quispe, entrevista telefónica con los autores, 23 de octubre, 2006.
- 107 “Evo: La nacionalización es un proceso que está a medio camino,” *Bolpress*, 14 de febrero, 2007: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006103115&PHPSESSID=da1d0df57b>
- 108 Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco,” 2006.
- 109 Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Análisis del Decreto Supremo 28701 ‘Héroes del Chaco,’ Emitido por el Gobierno de Evo Morales, 1ro de Mayo de 2006, CEDIB: Cochabamba, Bolivia, 2006, p. 25.
- 110 Robert Conrad, entrevista telefónica con los autores, 3 de mayo, 2006.
- 111 CEDLA, *Legitimando el orden neoliberal: 100 días de gobierno de Evo Morales*, La Paz: CEDLA, mayo 2006, p. 6.
- 112 “Ahora, las petroleras operan para YPFB,” *La Razón*, 30 de octubre, 2006; “La nacionalización bajo la lupa,” *Boletín económico, Análisis de coyuntura No. 4*, La Paz: Fundación Milenio, agosto, 2006; datos citados por el Ministerio de Hidrocarburos e YPFB.
- 113 “Ahora...,” *La Razón*, 30 de octubre, 2006.

- 114 CEDLA, "Contratos petroleros que consolidan la vieja política neoliberal," *Hora 25*, No. 45, diciembre-enero, 2007.
- 115 "Bolivia exportó de enero a octubre más que durante todo 2005," *Los Tiempos*, 16 de noviembre, 2006; cálculo del autor; "Trago amargo de Bolivia hace a Brasil buscar su propio gas," *Terra*, 28 de septiembre, 2006: [http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/trago\\_bolivia\\_brasil\\_1112463.htm](http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/trago_bolivia_brasil_1112463.htm)
- 116 "Bolivia recibirá \$US 110 millones adicionales por la venta de gas," 17 de julio, 2006: <http://www.hoybolivia.com/news.php?seccion=78&d3=36396>.
- 117 Walsh, Conal "Gazprom's Huge Venezuela Gas Deal Alarms U.S.," *The Observer*, 6 de agosto, 2006.
- 118 Petroandina instalará 15 nuevas estaciones de servicio en el país, *Los Tiempos*, 8 de diciembre, 2006.
- 119 "La nacionalización tropieza con su principal actor, YPFB," *La Razón*, 12 de agosto, 2006.
- 120 "Repsol de España amenaza a Bolivia con acciones legales," *Reuters*, 27 de agosto, 2006.
- 121 "Tarija busca asociarse a las petroleras," *Los Tiempos*, 3 de febrero, 2006.
- 122 "Errores técnicos afectan nacionalización hidrocarburos en Bolivia," *Reuters*, 13 de marzo, 2007.
- 123 Carlos Villegas, entrevista con Gretchen Gordon, La Paz, junio, 2005.
- 124 Michael L. Ross, "The Political Economy of the Resource Curse" (La economía política de la maldición de los recursos), *World Politics*, enero, 1999: <http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/paper.pdf>.
- 125 Jonathan Power, "The gift that corrupts: Nigeria struggles against the curse of oil," (El regalo que corrompe: Nigeria lucha contra la maldición del petróleo) *International Herald Tribune*, 8 de enero, 2004.
- 126 Jim Shultz, *Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenues* (Sigue al dinero: Una guía para monitorear los presupuestos y los ingresos de petróleo y gas), Nueva York: Open Society Institute, 2005: p. 32.
- 127 Emira Woods, "Oil Trip," (Viaje de petróleo) *Foreign Policy in Focus*, 26 de septiembre, 2006: <http://www.fpif.org/pdf/gac/0609oiltrip.pdf>.
- 128 Terry Lynn Karl, "Understanding the Resource Curse," (Comprendiendo la maldición de los recursos), *Covering Oil: A Reporters Guide to Energy and Development, Lifting the Resource Curse, Vol. 2*, Nueva York: Open Society Institute: p. 22.
- 129 Ibid, p. 25.
- 130 David Waskow and Carol Welch, "The Environmental, Social, and Human Rights Impacts of Oil Development," (Los impactos ambientales, sociales, y de derechos humanos en el desarrollo del petróleo), *Covering Oil: A Reporters Guide to Energy and Development, Lifting the Resource Curse, Vol. 2*, Nueva York: Open Society Institute, p. 102.
- 131 Roberto González Paláez, *Evaluación del sector hidrocarburos, Informe Económico No. 4, Estructura actual resultante de la capitalización/privatización de YPFB*, Santa Cruz, Bolivia: p. 5.
- 132 Robert Conrad, entrevista telefónica con los autores, 3 de mayo, 2006.
- 133 Joseph Stiglitz, "Who Owns Bolivia?" (¿Quién es el dueño de Bolivia?) *Daily Times*, 23 de junio, 2006.
- 134 "Territorios indígenas y empresas petroleras," Ceidís: Cochabamba, 2005: p. 71.
- 135 Guadalupe Montenegro, entrevista con los autores, Santa Cruz, 24 de abril, 2006.
- 136 "La nacionalización bajo la lupa," *Boletín Económico, Análisis de Coyuntura No. 4*, La Paz: Fundación Milenio, agosto, 2006; elaboración propia en base a: Banco Central de Bolivia, *Boletines del sector externo (1993-2005)*, p. 85; "Bolivia exportó de enero a octubre más que durante todo 2005," *Los Tiempos*, 16 de noviembre, 2006.
- 137 Néstor Ikeda, "Bolivia busca 5 800 millones en inversión privada," *Associated Press*, 19 de julio, 2006; Daniel Schweimler, "Bolivia unveils anti-poverty plan," *BBC News*, 17 de junio, 2006: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5090850.stm>.

- 138 Jane Monahan, "Bolivia's nationalisation plans in trouble," (El plan de nacionalización de Bolivia en líos) *BBC News*, 17 de agosto, 2006: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4801233.stm>. (Traducción de los autores).
- 139 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, 'Inversión extranjera en América Latina y El Caribe,' Capítulo IV, *Hydrocarbons: Investments and corporate strategies in Latin America and the Caribbean*, 2001.
- 140 Néstor Salinas Malléa, entrevista por correo electrónico con los autores, mayo, 2007.